

NOMENCLATURA : 1. [40] **Sentencia**
JUZGADO : 1° **Juzgado de Letras de Punta Arenas**
CAUSA ROL : C-1881-2022
CARATULADO : **BIOTT/FISCO DE CHILE- C.D.E**

Punta Arenas, cuatro de diciembre de dos mil veintitrés

VISTOS.

Con fecha 19 de noviembre de 2022, a folio 1, comparece don PABLO ANDRÉS BUSSENIUS CORNEJO, abogado, en representación convencional de don **HERNÁN ENRIQUE BIOTT VIDAL**, chileno, divorciado, pensionado, cédula nacional de identidad N° 6.466.565-0, ambos domiciliados para estos efectos en calle Lautaro Navarro 1066, Oficina 403, comuna y ciudad de Punta Arenas e interpone demanda ordinaria en juicio de hacienda, para la indemnización de los perjuicios por daño moral sufridos por su representado, en contra del **FISCO DE CHILE**, persona jurídica de derecho público, representado para estos efectos por el Procurador Fiscal (S) del Consejo de Defensa del Estado, don CLAUDIO PATRICIO BENAVIDES CASTILLO, abogado, ambos con domicilio en 21 de mayo 1678, Punta Arenas, o quien legalmente lo subroque, a fin que se declare en definitiva el derecho de su representado, en su calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, a percibir indemnización de perjuicios y, por ende, condene a la demandada a resarcir los daños morales ocasionados en virtud de los actos ilegales en que incurrió la Administración del Estado, atendidas las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que expone.

Indica que con el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Salvador Allende cambió drástica y dramáticamente la vida de cientos de miles de chilenos. Ese día supuso un antes y un después; fue el



inicio de las ejecuciones, las desapariciones, la prisión política, la tortura, la persecución, la represión, la censura, el exilio y la diáspora, en definitiva, fue el momento del miedo.

Agrega que, el cruento balance de la dictadura cívico militar que transcurrió desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el mes de marzo de 1990 arroja, de acuerdo con las comisiones de verdad, 1.183 personas desaparecidas, otras 2.008 ejecutadas y al menos 35.868 personas torturadas, cifras que en ningún caso son cerradas, puesto que progresivamente se han incorporado nuevas víctimas que en un principio no se les calificó como tales.

En ese contexto de graves violaciones a los Derechos Humanos, Magallanes y sus habitantes no tenían por qué ser la excepción.

Continúa transcribiendo el relato de lo vivido por su representado con ocasión de la traumática experiencia derivada de los actos realizados por el Estado y sus agentes durante la dictadura en Magallanes, quien señala:

"Nací en Punta Arenas el 17 de abril de 1951. Soy hijo de don Felipe Biott García y de doña María Adela Vidal Vda. de Biott (QEPD).

En el año 1969 terminé mis estudios en el Liceo de Hombres de Punta Arenas y comencé a trabajar en el Servicio Nacional de Salud, desempeñando trabajos temporales en el área de Estadísticas de los Policlínicos de la Población 18 de septiembre, Playa Norte y en el Hospital Psiquiátrico. Para finalmente ser contratado en la misma área en el Hospital Regional de Punta Arenas.

Simultáneamente en el año 1971 comencé a estudiar Técnico en Prevención de Riesgos en la Universidad Técnica del Estado en horario vespertino. Ingresé a la Juventud Socialista en 1969. En el año 1972 fui elegido



Secretario Regional de Prensa y Propaganda de dicha colectividad. Durante el gobierno de la Unidad Popular en conjunto con otros miembros de la Juventud Socialista realizaba trabajos voluntarios durante todos los fines de semana, tales como hermoejamento de parques vecinales, pintado de cercas en el Parque Chabunco y tareas de separación de lana en Lanera Austral.

Asimismo, formaba parte de la Brigada Elmo Catalán del Partido donde realizaba tareas de prensa y propaganda pintando muros para las elecciones y, también, para cuando Fidel Castro Ruz visitó la región.

Tras el Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973, específicamente, el día 19 de septiembre cuando me disponía como todos los días a ir a mi trabajo en el Hospital Regional de Punta Arenas, escuché en la radio mi nombre, que estaba siendo buscado y que debía presentarme lo antes posible ante una de las unidades militares.

Ese día igualmente concurrí a mi trabajo, allí encontré a mi jefa, Doña Adriana (no recuerdo su apellido), quien me informó que una patrulla militar había llegado para detenerme y que se habían llevado a Rubén Moil, dirigente de los trabajadores de la salud, y a Arturo Cheuqueman y Cesar Guelet, estos últimos trabajadores del aseo. Me devolví a mi casa, hablé con mi abuela, Doña Leonor Biott (QEPD), quien me pidió que me presentara al Regimiento Pudeto ubicado en calle Zenteno esquina Avenida Independencia.

Como a las 10:30 de la mañana me presenté ante la guardia del Regimiento Pudeto, me identifiqué y les dije que estaba siendo buscado por las autoridades militares. La guardia me llevó a lo que era la enfermería, la que conocía de la época en que realicé mi servicio militar. Allí me encontré con el que había sido mi instructor durante esa época, el sargento Francisco Barrientos, el que procedió a tomarme mis datos y a retirarme mi



documentación personal, para luego comunicarme que quedaba detenido. Procedió a esposarme con las manos en la espalda y a cubrirme los ojos con una venda, ordenando a continuación a otros militares que me llevaran hasta el sótano de la misma oficina.

Estando ya en el sótano se me ordenó arrodillarme y permanecer en dicha posición, advirtiéndoseme que de no hacerlo los guardias tenían instrucción de disparar, también tenían orden de no servirme agua ni comida. Permanecí en esa posición durante tres días, cuando me caía me volvían levantar y me golpeaban con los pies o las culatas de sus fusiles. Por las noches llegaban miembros de los servicios de inteligencia militar a interrogarme, me daban golpes de pies, puños y otras cosas, que me parecieron que eran tablas, ya que se rompían con los golpes, preguntándome en todo momento por dónde estaban las armas, por cómo me comunicaba con los guerrilleros cubanos que se encontraban en la zona (SIC) o por el paradero del resto de la dirección de la Juventud Socialista.

El día 21 de septiembre fui trasladado hasta el gimnasio del Regimiento Pudeto donde se encontraban alrededor de 400 o 500 presos políticos o "prisioneros de guerra" como ellos referían.

Los interrogatorios y torturas comenzaron nuevamente a fines de septiembre y comienzos de octubre de 1973. Me sacaban vendado en un camión desde el Regimiento Pudeto y me llevaban hasta el ex Hospital Naval ubicado en Avenida Colón entre las calles Chiloé y la calle Bories.

Los interrogatorios generalmente eran de noche y siempre iniciaban con patadas, golpes de puño y culatazos de fusiles para, posteriormente, terminar en una cama de alambre donde me aplicaban golpes de electricidad.

Durante uno de esos interrogatorios en que me aplicaban electricidad, perdí el conocimiento y desperté



reconociendo la voz del Dr. Guillermo Aravena, el cual se encontraba presionando fuertemente mi pecho porque había tenido un paro cardíaco, quien ordenó que me dejaran descansar por unas horas. Estas rutinas de tortura duraban generalmente toda la noche.

En otra oportunidad uno de mis torturadores me puso una pistola en la mano y la apoyo contra mi sien ordenándome que la disparara. Como no lo hice, el mismo procedió a percutar el gatillo más la pistola no estaba cargada, esto le causo una risa enloquecedora y nuevamente comenzaron con los golpes. En otra oportunidad me pararon sobre una silla con una soga al cuello simulando un ahorcamiento. El interrogador pateo una pata de la silla que estaba rota y caí al suelo para continuar con una golpiza salvaje.

A fines de octubre fui separado del resto de los prisioneros políticos y encerrado en una pequeña pieza al final del Gimnasio. Se ordenó que no se apagara la luz. Sólo salía de allí para el recuento nocturno o para volver a las largas noches de tortura y simulacros de fusilamiento que se realizaban al volver desde el "Palacio de las Sonrisas" al gimnasio donde estábamos prisioneros.

Fui sometido a Consejo de Guerra siendo condenado el 24 de noviembre de 1973 a 20 años de prisión, condena que, posteriormente, en 1976 me sería conmutada por la de extrañamiento.

A mediados de diciembre de 1973 cerraron el gimnasio del Regimiento Pudeto y junto a otros prisioneros fuimos trasladados hasta unos containers dentro del mismo Regimiento, donde permanecimos encerrados por espacio de tres días, para posteriormente ser trasladados al regimiento de Ojo Bueno. En dicho regimiento permanecimos hasta el 04 de enero de 1974, fecha en que como consecuencia del estallido del polvorín ubicado al interior del mismo fuimos evacuados en una tanqueta,



para ser llevados a un barracón en el Regimiento Cochrane de la marina.

En dicho lugar permanecimos por lo menos un mes, tras lo cual fuimos destinados al campo de detención de Isla Dawson. En Isla Dawson fui asignado a la "Barraca Remo", donde mi nombre fue reemplazado por una sigla, en mi caso R3 (Remo 3). El Campamento Rio Chico en Isla Dawson era un verdadero campo de concentración, presentaba alambradas en doble hilera y era custodiado por torres alrededor del campo.

Permanecí en dicho recinto hasta que fue cerrado casi a finales del año 1974. Mi siguiente destinación fue la cárcel publica de Punta Arenas.

En todos estos lugares la comida nunca fue buena. Muchas veces la carne olía a podrido y cuando el agua con carne que nos servían era reemplazada por porotos de almuerzo y crema de porotos para la cena, las ganas de vomitar eran irresistibles. Llegué a pesar 60 kilos. Cuando me tomaron una foto para mi ficha de prisionero y me pidieron que fuera a buscarla no me podían reconocer.

En mayo de 1976 fui trasladado a la cárcel de capuchinos y desde allí enviado al exilio a Estados Unidos. Me quitaron todos mis documentos y sólo me entregaron un pasaporte que tenía en cada página un timbre que informaba que era válido solo para salir del país.

Mi nombre no aparece en el listado de la Comision Valech, y es que ni la embajada ni el Consulado de Chile en Chicago nunca se molestaron, pese a tener mi dirección, en hacerme saber que existía esta Comisión que investigaba las violaciones a los derechos humanos sufridas por nosotros las víctimas en Dictadura".

Al terminar la transcripción del relato de su representado, el actor para efectos de complementarlo describe brevemente cada uno de los centros de Detención y/o interrogatorios en los que le tocó estar,



reproduciendo parte de la descripción que para cada uno de ellos figura en demanda interpuesta por 32 ex presos políticos de Isla Dawson, correspondiente a los autos rol **C-803-2008**, seguidos ante el 18° Juzgado Civil de Santiago, caratulados **"VALENCIA OYARZO ELI/FISCO DE CHILE"**

Así, describe el campo de concentración Rio Chico, Isla Dawson, caracterizado por su diseño similar a los campos de concentración nazis en Europa durante la segunda guerra mundial con presencia de guardias militares, lugar en que se torturó y reprimió a los prisioneros, detallando en su libelo la manera en que esto se llevaba a cabo. El campo de concentración Rio Chico se cerró el 26 de septiembre de 1974. Dawson como isla prisión confinó a más de 700 prisioneros políticos entre septiembre de 1973 y septiembre de 1974.

Continúa describiendo detalladamente otro campo de concentración el Regimiento de infantería motorizada N°10 Pudeto de Punta Arenas, lugar donde se confinaron centenares de prisioneros políticos entre 1973 y 1975. Los ciudadanos eran llamados en bandos militares y al momento de su presentación eran secuestrados y recluidos en el Gimnasio del regimiento Pudeto.

Dice que, en este recinto clandestino, existieron varios lugares de detención, el más grande fue el Gimnasio del Regimiento. Este era un amplio gimnasio en madera y cemento, donde no había nada para dormir, se dormía en el suelo de la cancha, en los asientos de las graderías, con una frazada, se ocupaba todo el espacio; en los meses de septiembre a Diciembre de 1973, pasaron centenares de prisioneros políticos magallánicos por este recinto. En diciembre de 1973 había cerca de 150 prisioneros políticos en el Gimnasio del Pudeto, incluyendo a varios prisioneros que eran menores de edad.



Las torturas se practicaban periódicamente en los patios, canchas de tiro y campos interiores de ejercicios del regimiento. En el interior del regimiento, se torturó en la enfermería del Regimiento por efectivos de civil de los servicios de inteligencia de la Región Militar Austral (RMA). También existió un lugar para interrogar y torturar en el hall de entrada del Gimnasio. Este lugar era particularmente siniestro, porque al interior del gimnasio estaban los más de 200 presos, obligados a escuchar toda la crueldad de estas largas horas de tortura. Se estima que alrededor de 350 prisioneros políticos fueron secuestrados y confinados en el Regimiento Pudeto entre 1973 y 1975.

Expone que su representado fue sometido injusta e ilegalmente a Consejo de Guerra en Magallanes, instancia en que como es sabido, se desconocieron y vulneraron deliberada y sistemáticamente los derechos procesales y, en particular, el derecho de defensa de los enjuiciados.

Añade que los procesos ante los Consejos de Guerra evidentemente adolecieron de una serie de irregularidades, al punto que incluso es inadecuado referirse a ellos como "procesos" propiamente tales. Todo indica que se trató de meras formas procesales utilizadas con fines represivos y políticos. Pero quizás las mayores objeciones tienen su fundamento en los métodos utilizados para la averiguación de los hechos, en particular, la tortura a los imputados para obtener declaraciones auto inculinatorias o atributivas de responsabilidad respecto de otros inculpados. Para muchos, estos procesos no fueron sino una mera excusa para torturar y propinar malos tratos a disidentes políticos.

Manifiesta que, un completo desarrollo del marco normativo, de la estructura y funcionamiento de los Tribunales Militares en Tiempo de Guerra, así como del "procedimiento" seguido ante los Consejos de Guerra, lo



encontramos en sentencia de nuestra excelentísima Corte Suprema, de fecha 3 de octubre de 2016, recaída en autos de revisión rol N° 27.543-2016, que anuló dos sentencias judiciales dictadas más de cuarenta años antes, en 1974 y 1975, por los Consejos de Guerra instalados por la Dictadura. Esos fallos habían sido dictados en el proceso rol 1-73 "Fuerza Aérea de Chile contra Bachelet, Alberto y otros, transcribiendo el considerando sexto de los autos de revisión rol N° 27.543-2016.

En relación a los consejos de Guerra de prisioneros políticos en Magallanes dice que estos fueron 6 y se llevaron a cabo durante 1973 -1974. En estos consejos se procesaron a 97 personas, 49 socialistas y 48 comunistas, incluyendo a 8 mujeres. Estos consejos fueron efectuados fuera de toda la legalidad existente hasta 1973. Todos estos prisioneros fueron torturados y no tuvieron representación jurídica adecuada.

Continúa señalando que en Magallanes los Consejos de Guerra fueron: Primer Consejo contra el Partido Socialista, Consejo de Guerra Hospital Regional, Consejo de Guerra contra el Partido Comunista, Consejo de Guerra contra la Juventud Socialista, Consejo de Guerra contra la Juventud Comunista, Segundo Consejo de Guerra contra el Partido Socialista y por último agrega que entre 1973 y 1974, hubo varios consejos de guerra que involucraron a personas individuales donde se condenaron por lo menos a 6 prisioneros.

En cuanto al Derecho refiere lo siguiente:

A. Hecho ilícito de autos como crimen de lesa humanidad

Los antecedentes expuestos, sin duda, forman parte del catálogo de crímenes reconocidos en la comunidad internacional y en el Derecho Internacional, como "Crímenes de Lesa Humanidad".

Dice que, la primera formulación para esta categoría de delitos, la encontramos en el Estatuto del Tribunal



Penal Internacional de Nuremberg de 1945, el que, como sabemos, tuvo por objeto juzgar las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial; y surge como respuesta a la insuficiencia de la categoría "Crimen de Guerra" que sólo podía aplicarse a actos que afectaran a combatientes enemigos excluyendo a los crímenes cuyas víctimas eran del mismo país o de estados aliados o apátrida

Expone que, según Bassiouni la trascendencia de dicho Estatuto reside en que "fue la primera instancia en el derecho penal internacional positivo que se usó el término específico de 'crímenes contra la humanidad'; asimismo, sería la primera vez que esta categoría de derecho internacional fue definida". Ahora bien, desde la terminación de los procesos de Nuremberg no se siguió ningún juicio ante tribunales internacionales sino hasta el comienzo de los años noventa, en donde se instauraron los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia ("TPIY") y para Ruanda ("TPIR"). Los estatutos de ambos Tribunales contribuyeron a reforzar la punibilidad consuetudinaria de los crímenes contra la humanidad, siguiendo en líneas generales y en lo esencial al Estatuto de Nuremberg. Sin embargo, tanto el Estatuto del TPIY como el del TPIR representan un nuevo avance en la materia al tipificar una mayor cantidad de conductas punibles a las establecidas en el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg, que no contemplaba al encarcelamiento, a la tortura y a las violaciones.

Manifiesta que en el año 2002 se llega a la culminación de un largo proceso de desarrollo del derecho penal internacional, mediante el establecimiento de la Corte Penal Internacional (que incluye la descripción de los crímenes de lesa humanidad), cuyo Estatuto ("Estatuto de Roma") se convierte en el instrumento jurídico más importante y actualizado en la materia.



Dice que, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tratado internacional vigente en nuestro país desde el día 01 de septiembre de 2009, tipifica, en su artículo 7 estos horrendos crímenes, transcribiendo el referido artículo.

Señala que a nivel de normativa interna encontramos la Ley 20.357 que tipifica Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio y Crímenes y Delitos de Guerra, transcribiendo su artículo 1.

Por último, en el plano conceptual, dice que resulta interesante citar un voto de disidencia del Ministro Sr. Cisternas, en el que se refiere en los siguientes términos a esta categoría de delitos: "Que el concepto de delito de lesa humanidad -conforme aparece del examen de la evolución histórica de la doctrina y de la jurisprudencia- implica, por exigencia de su núcleo esencial, que sea el resultado de la actividad ilícita de algún grupo o sector de poder -usualmente el Estado o el gobierno que tiene el mando del mismo-, tendiente a la afectación, disminución o eliminación de los integrantes de todo o parte de un sector o grupo que aquel considera contrario a sí mismo o a determinados intereses que declara superiores, de manera sistemática y sin límite en el uso de los instrumentos o medios encaminados a ese fin" (Excelentísima Corte Suprema, Fallo recurso de casación en el fondo, de fecha 23 de enero de 2018. Rol 31.711-17)

Concluye que, a la luz todo lo expuesto, resulta evidente que en el caso de marras nos encontramos frente a un ilícito que constituye un Delito de Lesa Humanidad, por lo que el Estado no puede eludir su responsabilidad civil por los padecimientos y dolores irrogados a mi representado, evadiendo a la normativa humanitaria internacional de naturaleza ius cogens.

B. Responsabilidad Estatal por violaciones a los Derechos Humanos.



Arguye que, el concepto de responsabilidad es inherente al Estado de Derecho, además de ser un concepto jurídico fundamental sin el cual no es posible comprender y entender el Derecho como realidad normativa.

El principio de responsabilidad es un principio fundamental del Estado de Derecho, cuya expresión es que cualquier persona que sea lesionada por otra persona en su persona física o moral o en sus bienes o derechos, tiene derecho a que se le repare el daño ocasionado, generando con ello para el causante la obligación de indemnizar. Se trata de un principio que impregna todo nuestro ordenamiento jurídico y adquiere las más variadas formas a través de estatutos jurídicos especiales de responsabilidad. Se habla, así, dependiendo del deber jurídico infringido, de responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad política o constitucional, responsabilidad administrativa, responsabilidad medio ambiental, etcétera; pudiendo una misma infracción generar una o más clases de responsabilidad que pueden concurrir separada o conjuntamente.

Ahora bien, tratándose de violaciones a los Derechos Humanos, la responsabilidad del Estado, y más específicamente, la obligación indemnizatoria del mismo, surge de la interacción normativa entre reglas internas, fundamentalmente de derecho constitucional, y reglas internacionales contenidas en diversas fuentes de Derecho Internacional Público.

Así como de la utilización de reglas interpretativas desarrolladas fundamentalmente por el Derecho Internacional, como son los principios de interpretación de buena fe, principio "pro homine" o "favor libertatis", interpretación evolutiva, equidad como criterio de integración e interpretación judicial, y las reglas de ius cogens, como fuente normativa y como



elemento para situar las reglas convencionales de Derecho Internacional. Así lo ha venido sosteniendo consistentemente nuestra Excelentísima Corte Suprema, transcribiendo el considerando sexto, fallo recurso de casación en el fondo, de fecha 23 de enero de 2018. Rol 31.711-17 y agregando, en idénticos términos: el considerando décimo, fallo recurso de casación en el fondo, de fecha 13 de abril de 2015. Rol 20.288-14, considerando sexto, fallo recurso de casación en el fondo, de fecha 23 de enero de 2018. Rol 31.711-17.

En lo referente a las reglas positivas de derecho interno pertinentes cita el artículo 1, inciso 4° de la Constitución Política de la República. Señalando que el profesor Humberto Nogueira- a propósito de este inciso- señala que "la persona es el objetivo y finalidad de toda la actuación estatal, estando el Poder Público al servicio de la dignidad y de los derechos de la persona humana, aspectos esenciales que integran el bien común como fin y tarea de los órganos estatales" (NOGUEIRA., Humberto. "Los derechos esenciales o humanos contenidos en los tratados internacionales y su ubicación en el ordenamiento jurídico nacional: doctrina y jurisprudencia". Revista Ius et Praxis, vol. 9, (1): pp. 403-466, 2003. [en línea]) El bien común y los derechos fundamentales que arrancan de la naturaleza humana son dos conceptos íntimamente ligados, por cuanto la promoción del bien común implica inexorablemente el respeto de estos derechos, aceptar algo distinto significaría desvirtuar el objeto -servir a la persona humana- y fundamento principal del Estado

Transcribe también el artículo 5 inciso 2° del mismo cuerpo legal para mencionar que La parte final de este artículo -es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes- fue



introducida por la reforma constitucional de 1989. Esta modificación consigna -para el Estado- obligaciones de respeto y promoción de los derechos esenciales emanados de la naturaleza humana. El Estado ya no acota su labor a la observancia pasiva y resguardo a posteriori -de ciertos derechos enumerados en un catálogo determinado- pues promover implica una actitud activa encaminada al impulso y fomento de los derechos en cuestión.

De modo tal que, junto con reforzar la protección constitucional de los derechos humanos, consolida el desarrollo de un bloque constitucional -integrado por derechos asegurados formalmente en la Carta Magna y derechos y garantías contenidos en tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes- y reconoce en la propia Constitución la existencia de otros derechos humanos no considerados en ella, maximizando el plexo de derechos y garantías fundamentales. Las disposiciones reseñadas, en conjunto con los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, que consagran los principios de supremacía constitucional y de legalidad respectivamente, conforman el denominado estatuto de responsabilidad extracontractual del Estado.

Luego, transcribe los artículos 6 y 7 también de nuestra Constitución Política de la República, manifestando que conforme a los mismos, el Estado es responsable cuando sus órganos actúan al margen del derecho, ya sea vulnerando normas constitucionales o legales dictadas conforme a la Constitución (artículo 6, inciso 1°), o asumiendo funciones respecto de las cuales carecen de competencia legalmente atribuida (artículo 7). Estas infracciones generan dos tipos de efectos: la nulidad del acto administrativo y la responsabilidad del Estado por los perjuicios ocasionados. Por último, corresponde agregar el artículo 38, inciso 2° de la Constitución Política, que establece una verdadera acción constitucional para hacer efectiva la



responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos por su actividad, ya sea lícita o ilícita, provoquen un daño a una persona natural y/o jurídica y termina citando el artículo 38 inciso 2° del mismo cuerpo legal.

Afirma que en materia de responsabilidad del Estado son pertinentes también las siguientes disposiciones, el DFL N° 1, del 2000, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Particularmente transcribe los artículos 2, 3, 4 y 42 inciso 2° de la Ley 18.575.

En cuanto a las reglas positivas del Derecho Internacional aplicables, se remite a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, transcribiendo su artículo 1.1 para afirmar que ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que ha visto en este artículo el fundamento de la responsabilidad internacional disponiendo que: "En efecto, dicho artículo (1.1) pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención" CIDH caso "Godine Cruz vs Honduras", parr. 173). Transcribe también otros fallos ahondan en este punto como CIDH Caso "Almonacid," párr.110. En el mismo sentido Caso "Goiburú y otros", párr.166. En el mismo sentido, ver "La Cantuta", párr. 227.

Expresa que Como se observa, a juicio de la CIDH, el antes citado artículo 1.1. establece el fundamento del sistema de responsabilidad internacional para los



Estados que son parte del sistema Interamericano, sometiendo a sus miembros a los imperativos del Derecho Internacional. Luego, cabe mencionar el artículo 2 de la CADH al disponer que: "Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades."

Finalmente, menciona al artículo 63.1 de la CADH para decir que constituye la adopción por parte de la Convención de un principio del derecho internacional y, en general, del Derecho sobre la responsabilidad en orden a que quien daña a otro debe ser obligado a reparar los perjuicios causados, indemnizando. Con base en lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado. Al respecto, dice que la Corte ha dicho "Tal como ha indicado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación"



Luego, se remite a la Convención de Viena y el Estatuto de Roma.

C. Reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Dice que, la "reparación integral" implica que "debe repararse todo el daño, no más allá del daño, pero todo el daño". A nivel del sistema universal de derechos humanos, su expresión formal se encuentra en la Resolución de la Asamblea General N.Q 60/147, sobre "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", aprobada el 16 de diciembre de 2005. Aunque esta resolución no tiene la fuerza normativa de un tratado internacional, es particularmente relevante, en la medida en que, como señala el propio preámbulo de la resolución, estos principios, "no entrañan nuevas obligaciones jurídicas internacionales o nacionales", sino que proponen mecanismos para hacerlas efectivas. En este sentido, cabe destacar que la resolución establece expresamente el derecho de las víctimas a obtener una "reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido". Destaca los artículos 11, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.

Indica que en el ámbito interamericano, la CADH dispone que, establecida la violación de un Derecho, la CIDH debe disponer "que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada" (art. 61). A partir de esta norma, la Corte IDH ha construido el deber estatal de reparación integral (*restitutio in integrum*) a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, éste emana de la obligación de garantizar el libre y pleno



ejercicio de los derechos reconocidos en la CADH (Corte IDH, 1988).

Expresa que el primer caso contencioso que arribó a las puertas de la CIDH en el que se debatió la *restitutio in integrum* fue Velásquez Rodríguez c/ Honduras. En éste se puso en tela de juicio la responsabilidad internacional de Honduras respecto a la desaparición forzada de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez. Concluyó con sentencia de fecha 21 de julio de 1989.

En sus líneas la CIDH indicó "La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (*restitutio in integrum*), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral.

Afirma que, tanto el sistema universal como el interamericano reconocen un derecho a la reparación integral, la cual incluye la indemnización pecuniaria de todos los perjuicios económicos, aunque no se agota en ella, opinión que es compartida por nuestra nuestra excelentísima Corte Suprema, transcribiendo el considerando octavo, fallo recurso de casación en el fondo, de fecha 13 de abril de 2015. Rol 20.288-14).

En cuanto al daño moral refiere que tradicionalmente la jurisprudencia de nuestros tribunales adscribió a una definición restrictiva de daño moral, la que comúnmente se identificaba con la expresión latina *pretium doloris* o "precio del dolor", en la que se definía al daño moral como el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física, en sus sentimientos o afectos o en su calidad de vida.



Sin embargo, Pretium doloris no es más que un tipo de daño moral. En palabras del Marcelo Barrientos Zamorano, profesor de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile "Consideramos que la expresión "daño moral" se relaciona con un concepto jurídico indeterminado mucho más amplio hoy que el simple pretium doloris, que no es sino una especie más de daño moral. Esta expresión sería conveniente dejarla a un lado como expresión válida para este daño inmaterial. (...) no todo daño extrapatrimonial es pretium doloris, aunque todo pretium doloris sí es un daño extrapatrimonial, hay una relación más bien de género a especie." (BARRIENTOS ZAMORANO, Marcelo. "Del Daño Moral al Daño Extrapatrimonial: La Superación del Pretium Doloris". Revista Chilena Derecho [online]. 2008, vol.35, n.1 pp.85-106)

Así lo ha reconocido nuestra excelentísima Corte Suprema "En resumen, la doctrina y jurisprudencia prefieren ampliar la noción de daño resarcible a la lesión o afectación, sea de un derecho subjetivo reconocido formalmente, sea de un interés en la satisfacción de necesidades o bienes humanos de carácter privado." (Excelentísima Corte Suprema, Considerando Sexto, Fallo recurso de casación en el fondo, de fecha 23 de enero de 2018. Rol 10649-15), también transcribe el Considerando Décimo quinto, Fallo recurso de casación en el fondo, de fecha 28 de marzo de 2013. Rol 3844-2010, Excelentísima Corte Suprema.

Manifiesta que de allí que sea más acertado definir el daño moral en un sentido amplio, como la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima, de esta forma es posible comprender en la reparación todas las categorías o especies de perjuicios morales (y no sólo el pretium doloris. Continúa transcribiendo Doctrina al efecto, refiriéndose a doña Carmen Domínguez Hidalgo,



don Enrique Barros Borie y a don Humberto Noguera Alcalá.

Afirma que la vida del demandante, como la de tantos otros, fue interrumpida de la forma más violenta e inhumana, siendo víctima de una serie de hechos sistemáticos y criminales por parte de los organismos de seguridad de la Dictadura Militar de la época. En lo que respecta al daño moral y a su reparación, estas violaciones fueron sistemáticamente ejecutadas por órganos estatales en el cumplimiento de una política terrorista del Estado, lo que produjo un considerable, indeleble, profundo, extenso y perdurable daño moral que marcó para siempre su vida, que le privó de libertad, de la compañía de su familia, de sus amigos, de sus colegas de trabajo, de sus compatriotas, del goce de una existencia plena, libre de asechanzas, de peligros, de riesgos, libre de agentes del Estado amparados en la impunidad dispuestos a violar sus derechos humanos. El dolor, el sufrimiento, el temor, la angustia, la sensación de pérdida, desarraigo, rabia, impotencia, sensación de vulnerabilidad, lo injusto y absurdo de la situación a que se vio enfrentado, configuran evidentemente un daño moral, que como hemos visto, resulta indemnizable.

Señala que respecto de la prueba del referido daño moral en sede judicial, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere ser probado en juicio en tanto se tenga por acreditado el hecho ilícito que lo ha generado.

Esta jurisprudencia señala que, al momento de precisar la existencia y entidad del daño moral reclamado, por su naturaleza netamente subjetiva que surge de "la propia naturaleza afectiva del ser humano", no puedan aplicarse las mismas reglas utilizadas para la determinación de daños materiales (que son susceptibles



de prueba y de determinación directa), de modo que el daño moral "queda enteramente entregado a la regulación prudencial de los jueces, tomando en consideración aspectos como las circunstancias en que se produjo y todas aquellas que influyeron en la intensidad del dolor y sufrimiento experimentado [...] y no podría ser de otro modo porque materialmente es difícil, sino imposible, medir con exactitud la intensidad del sufrimiento que provoca la muerte o intento de homicidio de un familiar en tan repudiabiles circunstancias". (Excelentísima Corte Suprema, Sentencia de reemplazo dictada por la Sala Segunda en la causa Rol N° 1568-2017, con fecha 16 de noviembre de 2017).

Asegura que, idéntico criterio al de la dogmática y la práctica judicial chilenas, se halla a nivel de la jurisprudencia internacional. En la actualidad, ya es jurisprudencia constante y pacífica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la idea de que el daño moral no requiere prueba en sede jurisdiccional. Finalmente, y en el entendido que ninguna cifra podrá reparar todo el daño experimentado por las víctimas de violaciones a los derechos humanos, solicita se condene al FISCO DE CHILE a pagar la suma de \$500.000.000 (quinientos millones de pesos) al demandante, por el daño moral que sufrió producto de los hechos descritos en la presente demanda

Por tanto, en mérito de lo expuesto, normas legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 253 y siguientes, en relación con los artículos 748 y siguientes, todos del Código de Procedimiento Civil, solicita tener por interpuesta demanda ordinaria en juicio de hacienda, de indemnización de perjuicios, en contra del FISCO DE CHILE, representado por don CLAUDIO PATRICIO BENAVIDES CASTILLO, ambos ya individualizados, acogerla en todas sus partes, condenando al demandado a pagar a su representado una indemnización por el daño



moral sufrido, ascendente a \$500.000.000 (quinientos millones de pesos) o la suma o cantidad que este tribunal estime de Justicia conceder conforme al mérito del proceso, más intereses, reajustes legales desde que la sentencia cause ejecutoria, con costas.

A folio 6 y previo emplazamiento legal, la demandada contestó la demanda solicitando su rechazo en atención a los argumentos de hecho y derecho que expone.

Dice que el demandante no se encuentra incluido en los registros de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, denominada Comisión Valech.

Así, la marginación del actor del proceso de justicia transicional que Chile adoptó para identificar a las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado, implica igualmente que se ha excluido de los derechos y consecuencias jurídicas que tiene la inclusión en la nómina de la así llamada Comisión Valech. Una de las consecuencias jurídicas relevantes para este litigio en particular es que, a diferencia de aquellos casos en que los demandantes figuran en el listado de víctimas de prisión política y tortura, en este caso el Estado no ha reconocido como ciertos los hechos ni demás antecedentes que sirven de base al relato del demandante

Por esta razón es que controvierte expresamente los hechos en que el demandante funda su demanda y muy concretamente en relación a la forma en que se desarrollaron los hechos que la afectaron y en los que radica su pretensión indemnizatoria, sin que entonces pueda estarse al mérito del informe transicional indicado, por la sencilla razón que el nombre del actor no figura en dicho listado.

Agrega que, la demanda adolece de un grave defecto puesto que no cita ni existe pronunciamiento judicial alguno que haya declarado que el actor fue efectivamente



víctima de un delito de lesa humanidad que le haya considerado a su vez víctima de violaciones a los derechos humanos.

Indica que existe una falta de legitimación activa del demandante, toda vez que consta que don Hernán Enrique Biott Vidal comparece a estrados, conforme indica en su demanda, en la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos, por la detención y violencia que habría sufrido. Sin embargo, como ya se advirtió el actor no figura como víctima de prisión política y tortura, en ninguno de los informes emitidos por la Comisión de Valech, en diciembre de 2004, julio 2005 ni agosto de 2011.

En efecto, como se expondrá en los apartados siguientes, el Estado de Chile consagró un sistema institucional de reconocimiento a las víctimas de prisión política mediante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ("Comisión Valech I"), y posteriormente, con el trabajo realizado por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura ("Comisión Valech II"), con la finalidad de identificarlos y hacerlos titulares de los beneficios contemplados por las leyes de reparación, en el contexto de la justicia transicional para las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. De este modo, el demandante al pretender indemnización por daño moral por hechos ocurridos hace décadas, sin haber sido reconocida por ninguna de las comisiones antedichas, carece de la legitimidad para interponer la acción de autos, pues ésta la tendrían sólo aquellas víctimas que efectivamente fueron reconocidas por los mecanismos institucionales dispuestos por el Estado para estos efectos.



En subsidio, alega la improcedencia de las indemnizaciones dinerarias demandadas por limitación de la justicia transicional. Dice que la indemnización solicitada en autos se desenvuelve en el marco de violaciones a los derechos humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transicional, tanto en el Derecho Interno como en el Internacional. En efecto, sólo desde esa óptica pueden analizarse y comprenderse los valores e intereses en juego en materia indemnizatoria. Ello porque en este ámbito se ha de atender tanto a la necesidad de que la sociedad reconozca los errores del pasado para que éstos no se repitan en el futuro, como a la necesidad de decidir la forma en que se inserta la reparación de víctimas y, en general, de toda la sociedad en una política amplia y de contornos temporales precisos.

Así, no es extraño que muchas de los procesos de reparación privilegien a algunos grupos en desmedro de otros; se compensen algunos daños y se excluyan otros; se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño; o, como es este el caso, se establezcan ciertos períodos determinados para presentar los antecedentes que sirven de fundamento a la reclamación.

En este escenario, la ley 19.992 ha constituido un esfuerzo trascendental de reparación, pues mediante ella se hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a las víctimas de prisión política y tortura mediante prestaciones en dinero -preferentemente en cuotas mensuales- con lo que permitió y permite que numerosas víctimas, obtengan mes a mes una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de interés público. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos. En términos de costos



generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de Pensiones, Bonos, Desahucio (bono compensatorio) y bonos extraordinario, desembolsando el Fisco, a diciembre de 2019, el total de \$992.084.910.400.-

Añade que, la pretensión económica demandada es improcedente porque en la especie, existe un sistema legal de reparación pecuniaria para el que se estableció un procedimiento legal que, dentro de determinados plazos, reunió antecedentes y elaboró un listado de víctimas de prisión política y tortura que luego fueron incluidas en un complejo sistema reparatorio. No puede pretenderse, como alega el demandante, que su omisión exija del Estado una respuesta que genere reglas especiales en los mecanismos de justicia transicional.

Expresa que, igualmente debe considerarse que no pueden aplicar aquí los mecanismos y estándares regulares de responsabilidad del Estado. El contexto de la justicia transicional, en el que se insertan este tipo de causas, es un contexto especialísimo en el que el Estado desarrolla una política de reparación a fin de superar, en la medida de lo posible, los dolores del pasado. Por eso en los diversos países del mundo donde se han llevado adelante este tipo de políticas, se aplican reglas especiales justificadas en la excepcionalidad de la situación.

Indica que, esta realidad excepcional es la que impide que se apliquen a hechos como los que se narran en la demanda, las disposiciones regulares en materia de responsabilidad del Estado. Estas últimas no pueden sobreponerse a las reglas excepcionales propias de la justicia transicional pues el derecho a reglamentado una vía especial para una situación excepcional. Pretender aplicar los estándares regulares de responsabilidad civil por daños a una situación tan excepcional como la que nació en Chile al amparo de medidas propias de la



justicia transicional, implica igualar, en sus fundamentos y efectos, un mecanismo reparatorio propio de la justicia transicional con aquel que opera en la regularidad de los casos. Hacerlo desconoce que el Estado ha optado por un camino especial de reparación que debe ser resguardado.

Arguye que, en el contexto de lo que se ha anotado, es relevante destacar el trabajo de las comisiones convocadas por el Estado en dos oportunidades para recibir antecedentes y promover políticas de reparación. Todo ello con el objeto de mostrar el esfuerzo estatal y la especificidad de las medidas propias de la justicia transicional que, como se ha dicho, impiden someter el caso que se analiza a los criterios regulares de responsabilidad del Estado.

Continúa describiendo detalladamente la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, su definición, procesos de trabajo, objetivos, entre otros.

Lo mismo hace con la Comisión asesora Presidencial para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura.

Concluye que, nuestro país ha llevado adelante una política de reparación que se inserta dentro de las medidas propias de la justicia transicional. Una de estas medidas es la convocatoria a la Comisión Valech I -tanto en su período original como en su etapa de reconsideración- y la Comisión Valech II, las que tuvieron como objeto el determinar de acuerdo a los antecedentes que se presentaren, quiénes fueron las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Para el cumplimiento de su objetivo, se constituyó un organismo técnico, donde mediante un detallado



procedimiento y resguardando la confidencialidad de los antecedentes que aportaron cada uno de quienes comparecieron, se entregó como resultado sendos informes, en que se comunican tanto los fundamentos generales que se tuvieron en cuenta para rechazar la calidad de víctima de los ciertos comparecientes, como los listados de todos quienes fueron calificados como víctimas de prisión política y torturas por el Estado. Hoy, tras más de una década de haber culminado el plazo para hacerse parte de esta política de reparación, el demandante intenta invocar las disposiciones del derecho común para obtener una indemnización que debió haber reclamado en su oportunidad, en el contexto de medidas adoptadas al amparo de la justicia transicional. La omisión del demandante, libre y consciente, tiene efectos jurídicos y no puede desconocer que el Estado ha optado por un camino especial de reparación que debe ser resguardado.

En subsidio, de las excepciones precedentes, opone la demanda la excepción de prescripción extintiva de las acciones deducidas conforme a los siguientes argumentos.

Opone la excepción de prescripción de la acción de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse extinto el derecho del demandante por prescripción, se rechace la demanda en todas sus partes. Conforme al relato de hechos contenido en la demanda, la detención y apremios experimentado por el actor, se produjeron entre el 19 de septiembre de 1973 hasta mayo de 1976.

Es del caso que, aun comprendiendo que las particulares y difíciles circunstancias implican entender suspendida la prescripción durante el período del Gobierno Militar, esto es, a contar del 11 septiembre de 1973, por la imposibilidad o extrema



dificultad de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, y prolongando este entendimiento hasta la restauración en plenitud de la normalidad constitucional, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 22 de noviembre de 2022, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil, para todos los casos, sea cual fuere la fecha de inicio de cómputo que para ello se considere.

En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechace íntegramente la acción indemnizatoria deducida por el actor como consecuencia de ello, por encontrarse extinta por prescripción.

Asimismo, al no haber sido incluido el demandante en los sistemas de reparación de la justicia transicional, en lo específico, los registros de la Comisión Valech, no estamos en presencia de un delito de lesa humanidad, por lo que sus alegaciones respecto de una supuesta imprescriptibilidad de su acción resultan aún más improcedentes.

En subsidio, en caso que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opongo la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización, sin importar, insistimos, cual fuere la data de inicio de cómputo que se considere, y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.



Reitera que, en relación con esta materia a pesar de lo sostenido inicialmente en la demanda, no existe una sentencia penal que individualice e imponga condenas por la prisión y apremios que habría sufrido el actor.

Continúa señalando que sobre esta materia cabe recordar que la prescripción es una institución universal y de orden público. Efectivamente, las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, el transcribe.

Esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión "igualmente" que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2°, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Afirma que, la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1°, del Código Civil). La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado, cuya es la única reparación que se reclama en autos. Como es sabido, toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.



Luego, cita y transcribe Sentencia del Pleno de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013.

En cuanto al contenido patrimonial de la acción indemnizatoria refiere que cualquiera sea el origen o naturaleza de los perjuicios no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción. Sobre el particular debe considerarse como, en forma reiterada, se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la reiterada jurisprudencia, que en la especie se han ejercido acciones de evidente contenido patrimonial, que persiguen hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria, que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

En cuanto a las normas contenidas en el Derecho Internacional, dice que en relación a la alegación contenida en la demanda vinculada a la imprescriptibilidad de la acción para obtener la reparación por los daños reclamados conforme al derecho internacional de los derechos humanos, mi parte se hará



cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

En efecto, la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad", aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a "los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar -tal como lo ha reconocido la Excmá. Corte Suprema - que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Así, Los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal. La Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada "Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad", se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.



La Convención Americana de Derechos Humanos, invocada en la demanda fuerza a señalar que, sin perjuicio que la aplicación de dicho Tratado no es atingente al caso sub-lite puesto que, en la época en que acontecieron los hechos, no estaba vigente, dado que su promulgación se produjo por Decreto Supremo N° 873 de 1990, publicado en el Diario Oficial el 5 de enero de 1991; ninguna duda cabe que la citada normativa no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria. En relación a esta Convención debe destacarse que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultando exclusivamente a dicha Corte Interamericana para imponer condenas de reparación de daños y, por lo mismo, no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile. El mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Afirma que, la Excm. Corte ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación



interpuesto en los autos ingreso N° 1.133-06, caratulados "Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile", de 24 de julio de 2007, que en sus considerandos vigésimo quinto y vigésimo sexto, los que transcribe, desestimó el recurso de casación de la demandante por considerar inaplicables las disposiciones citadas.

Lo mismo aconteció en la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco, en la causa "Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile", autos ingreso N° 4.067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007.

Manifiesta que, no habiendo en consecuencia norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, US. no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado. Con el mérito de lo expuesto precedentemente deberá rechazarse la demanda por encontrarse prescritas la acciones que se entablan.

En subsidio de las defensas y excepciones que preceden y en cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas dice que el monto pretendido es excesivo, según se señaló con anterioridad, el actor no se encuentra reconocida como víctima de violencia política en la Comisión Valech, ni tampoco cuenta con una decisión jurisdiccional que acredite la calidad que invoca, por lo que deberá rendir prueba en torno a la afectación moral que le supuso la vulneración de garantías experimentada y la manera en que ésta implicó una alteración efectivamente disvaliosa de su curso



vital, lo que expresa que, en la medida que se sostenga que existieron hechos imputables a agentes estatales que generaron un efectivo perjuicio a los atributos esenciales de la personalidad del actor, se deberá aparejar prueba que permita sostener la convicción jurisdiccional en torno a este punto.

Con relación al daño moral, y sin perjuicio de las consideraciones precedentemente expuestas, hacemos presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria, tal y como lo reconoció el propio Presidente de la República con motivo de la entrega del informe de la Comisión Valech. En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Tratándose del daño puramente moral, la finalidad descrita no es alcanzable de ninguna manera, así como tampoco puede plantearse que compense en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se borra por obra de la indemnización. La pérdida o lesión producida por él permanece cualquiera sea la magnitud de la suma de dinero que se perciba.

Indica que, por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una



satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva, como ocurre precisamente con las prestaciones otorgadas en virtud de las leyes reparatorias ya invocadas o con las facilidades, por ejemplo, educacionales, a las que ellas dieron acceso. Idéntica consideración, esto es, el carácter personalísimo de la afectación de los atributos morales de la persona, imposibilitan del todo pretender igualar situaciones que, lógicamente, son completamente diversas

Afirma que, no se trata, como ya explicó, de emitir una suerte de apreciación valorativa, íntima, de los eventuales padecimientos experimentados por el demandante, sino que simplemente de hacer patente la dificultad de alcanzar una ponderación estandarizada en este género de materias y la improcedencia de igualarlas sin más, haciendo tabla rasa del constitutivo esencial de los daños morales. Ha dicho la Excma. Corte Suprema: "Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido". Así, "el juez al avaluar este daño, debe proceder con prudencia, tanto para evitar los abusos a que esta reparación puede dar origen, cuanto para impedir que se transforme en pena o en un enriquecimiento sin causa para quien lo demanda". Por otra parte, es dable advertir que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión y naturaleza del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen



influencia estas capacidades. En tal sentido, la cifra pretendida de \$ 500.000.000 en la demanda como única y exclusiva compensación del daño moral, resulta por demás manifiestamente excesiva, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con extrema prudencia.

En relación con este último particular, resultará del todo pertinente consignar acá que los tribunales superiores en fecha muy reciente, han declarado, además, que la constatación de la efectiva concurrencia y valoración de los perjuicios morales no se puede dar por establecida con el sólo hecho de haberse incorporado los nombres de las víctimas en las nóminas libradas por los órganos encargados de materializar los beneficios de las leyes de reparación, estableciéndose incluso que, a falta de mayor prueba, dichas pretensiones deben ser desestimadas, citando un fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, 7 de febrero 2019, rol civil-5029-2018, en el que se refleja la especial situación de la demandante, que no se encuentra reconocida por la Comisión Valech ni cuenta con una decisión jurisdiccional que sustente sus dichos.

Por tanto, solicita tener por contestada la demanda civil deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar las acciones deducidas en todas sus partes, con costas, o en subsidio, rebajar los montos indemnizatorios pretendidos en razón de los fundamentos que se dejan enunciados en el cuerpo de esta presentación.

A folio 14, el demandante evacuó el trámite de réplica señalando que en cuanto a la falta de legitimación activa reclamada por la demandante carece de respaldo normativo puesto que lo que habilita a su parte a demandar de indemnización de perjuicios por daño



moral es la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos del demandante y no, como erradamente sostiene el demandado, la inclusión en una determinada nómina o registro.

En cuanto a la excepción de prescripción extintiva dice que las normas del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad.

Indica que son 2 las premisas presentes en la argumentación del Consejo de Defensa del Estado:

- 1) Que las acciones reparatorias, como la intentada en autos, pertenecen al ámbito patrimonial, encontrándose por tanto regidas por el Derecho Civil.
- 2) Que en el derecho civil se encuentra el estatuto general de responsabilidad.

Sin embargo, ambas premisas se encuentran actualmente superadas. En efecto, en el estado actual del debate, no existe mayor discusión, a nivel doctrinario ni jurisprudencial, en cuanto a que las acciones reparatorias, por su especial ámbito, tienen una naturaleza internacional o humanitaria, no patrimonial y que esta clase de delitos se sujeta a un régimen autónomo de responsabilidad estatal.

Continúa citando y transcribiendo jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema.

Dice que, los delitos de lesa Humanidad se sujetan a un régimen autónomo de responsabilidad estatal.

Así, ratándose de violaciones a los Derechos Humanos, como es el caso sub lite, la responsabilidad del Estado, y más específicamente, la obligación indemnizatoria del mismo, no surge del derecho civil, sino de la interacción normativa entre reglas internas, fundamentalmente de derecho constitucional, y reglas internacionales contenidas en diversas fuentes de Derecho Internacional Público, esto último posibilitado



por la remisión que hace el artículo 5 de la Constitución Política de la República. Así como de la utilización de reglas interpretativas desarrolladas fundamentalmente por el Derecho Internacional, como son los principios de interpretación de buena fe, principio "pro homine" o "favor libertatis", interpretación evolutiva, equidad como criterio de integración e interpretación judicial, y las reglas de ius cogens, como fuente normativa y como elemento para situar las reglas convencionales de Derecho Internacional. Luego, cita y transcribe jurisprudencia de nuestra excelentísima Corte Suprema.

Expresa que, de la existencia de este régimen autónomo de responsabilidad estatal se siguen determinadas consecuencias: una de ellas es que la responsabilidad del Estado que surge por violaciones a los derechos humanos no se extingue por el transcurso del tiempo.

La responsabilidad, tanto civil como penal derivada de la comisión de crímenes contra la humanidad, se sujeta a un mismo estatuto de imprescriptibilidad integral, que tiene su fuente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el que postula que todo daño acaecido en el ámbito de estos derechos, ha de ser siempre reparado integralmente, con arreglo a las normas de derecho internacional convencional, o en su defecto, del derecho consuetudinario, de los principios generales o aún de la jurisprudencia emanada de tribunales de la jurisdicción internacional. Tanto el sistema universal como el interamericano reconocen este derecho a la reparación integral. En el ámbito del sistema de protección universal de los derechos humanos, el derecho de las víctimas a obtener reparación, constituye un principio general del derecho internacional. En relación con lo anterior, es posible hacer mención de los desarrollos existentes en el



Derecho Internacional en materia de aplicabilidad del instituto jurídico de la prescripción a acciones judiciales para obtener reparaciones frente a graves violaciones de derechos humanos.

Señala que existen otras argumentaciones presentes en la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal que declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de crímenes de lesa humanidad.

El principio de buena fe -junto al pacta sunt servanda- suele ser invocado para fundar la obligatoriedad del derecho internacional y la integración normativa de sus fuentes, transcribiendo jurisprudencia al efecto.

Expone que otro argumento empleado para descartar la aplicación prescripción extintiva, presente en la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, es el "principio de congruencia" en virtud del cual se afirma el carácter discriminatorio de la distinción entre acciones penales imprescriptibles y acciones civiles prescriptibles. Si de un mismo hecho nacen ciertas acciones, darles un tratamiento distinto no guarda coherencia, por lo tanto, si de los crímenes contra la humanidad derivan acciones, civil y penal, ambas deben tener la misma suerte, es decir, se excepcionan de la prescripción extintiva.

Expresa que la excepción interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, representante del Fisco de Chile, contradice abiertamente el expreso reconocimiento de su responsabilidad internacional efectuado por el Estado Chileno durante la tramitación del CASO ÓRDENES GUERRA Y OTROS VS. CHILE seguido ante CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, mediante sentencia de fecha 28 de noviembre de 2018, la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS condenó al Estado chileno como responsable por la violación del derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a



la protección judicial, ello como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción a acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad.

Durante la tramitación del caso, el Estado Chileno efectuó un expreso reconocimiento de su responsabilidad estatal, transcribiendo parte del fallo.

Finalmente, dice que, cabe consignar el hecho que diversas autoridades y representantes del Estado Chileno han defendido ante organismos internacionales la imprescriptibilidad de la acción civil indemnizatoria, a saber y la jurisprudencia constante y consistente de nuestra excelentísima Corte Suprema, ha venido reconociendo, a partir del año 2015, el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de lesa humanidad, transcribiendo diversos fallos.

Por último, en cuanto al daño e indemnización reclamada, las alegaciones del Fisco dicen relación con la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido por mi representado. Me remito a lo señalado en la demanda en cuanto a la procedencia del daño moral en este tipo de ilícitos. Asimismo, y en la etapa procesal correspondiente, justificaremos la justicia del monto solicitado.

A folio 18 el demandando evacuó la dúplica.

A folio 21 se recibió la causa a prueba.

A folio 45 se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, a folio 21, se recibió la causa a prueba por el plazo legal fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:

1.- Efectividad que el demandante sufrió, maltratos y abusos, por parte de agentes del Estado de Chile o



personas al servicio de éste. Hechos que configuran el maltrato, época y circunstancias en que se cometieron.

2.- En la afirmativa del punto anterior, efectividad de haberse ocasionado perjuicios al demandante, imputable al demandado. Naturaleza y monto del daño.

3.- Efectividad de haber transcurrido y extinguido el plazo que habilita la acción entablada en la demanda. En la afirmativa época de inicio y término de dicho plazo.

SEGUNDO: Que, para acreditar su pretensión la parte demandante produjo las siguientes probanzas:

I.- Instrumental, consistente en los documentos no objetados:

1.- Foto Prisioneros Barraca Remo del campo de detención de Isla Dawson, en la que aparece don HERNÁN ENRIQUE BIOTT VIDAL.

2.- Informe de la Visita al Campo de Detenidos del Regimiento de Inf. Ref. N° 10 "Pudeto", realizada por el Delegado General y Delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), donde se incluye listado de detenidos al 06 de diciembre de 1973, en el que figura con el N° 54 don HERNÁN ENRIQUE BIOTT VIDAL.

3.- Sentencia de Consejo de Guerra, que condena a don HERNÁN ENRIQUE BIOTT VIDAL a la pena de 20 años de reclusión mayor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos y derechos políticos y a la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de Rebelión Militar y de los delitos señalados en las letras a), b) y d) del art. 4 de la Ley 12.927, Sobre Seguridad del Estado.

4.- Certificado de Antecedentes válido para FINES ESPECIALES de don HERNÁN ENRIQUE BIOTT VIDAL, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, donde figura condena a 20 años de reclusión mayor por



infracción a la Ley Seguridad del Estado sancionado como Rebelión Militar y la conmutación de la pena por extrañamiento.

5.- Informe Psicológico de Daño de don HERNÁN ENRIQUE BIOTT VIDAL, practicado por profesional del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y DDHH (PRAIS).

6.- Tapa y páginas 1 a 13 del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ("Comisión Valech"), correspondientes a prólogo e índice del mismo.

7.- Páginas 225 a 250 del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ("Comisión Valech"), correspondientes al Capítulo V- Métodos de Tortura: Definiciones y Testimonios.

8.- Páginas 467 a 513 del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ("Comisión Valech"), correspondientes al Capítulo VIII- Consecuencias de la Prisión Política y Tortura, Sección: Las consecuencias en las Víctimas.

9.- Tapa y páginas 539 a 543 de la "Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech I).

10.- Informe acerca del daño psicológico y emocional en familiares de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos durante la Dictadura Militar, elaborado por Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS), de fecha agosto de 2016.

11.- Informe en Términos Generales sobre las secuelas dejadas en el Plano de Salud Mental relacionadas con las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la Dictadura Militar, elaborado por la Psicóloga del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos PRAIS Servicio de Salud Metropolitano Norte, de fecha 23 de septiembre de 2016.



12.- Tapa y páginas 30 a 50 de la "Norma Técnica para la Atención de Personas Afectadas por la Represión Política ejercida por el estado en el periodo 1973-1990", del Ministerio de Salud.

13.- Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 372.

II.- **Testimonial** consistente la declaración de los testigos doña Romina Valentina Yañez Vasquez, don Cesar Segundo Guelet Vera, don José Augusto del Carmen Vera Velasquez y don Sergio Reinaldo Reyes Soto quienes previamente juramentados y habiendo dado razón de sus dichos señalaron lo siguiente:

1.- **Romina Valentina Yañez Vasquez**, cédula de identidad N°19.694.605-5:

AL PUNTO UNO:

La testigo responde: Si, es efectivo, el Sr. Biott fue detenido el 19 de septiembre de 1973, el mismo se entregó en el Regimiento Pudeto, inmediatamente fue llevado a una bodega o a un sótano y ahí lo obligaron a estar 3 días arrodillados sin poder dormir, sin agua ni alimentos, tampoco podía ir a l baño estaba bajo estrictas amenazas de muerte si hacía cualquiera de estas cosas. También fue sometido a golpes, puñetazo, culatazos, de ahí fue trasladado al gimnasio del mismo regimiento y de ahí fue llevado al palacio de la risa para ser torturado en reiteradas ocasiones, ahí le aplicaban electricidad, lo colocaban en un catre de una cama, lo amarraban y le aplicaban electricidad en diferentes partes del cuerpo, como en los genitales, la legua y en las extremidades de su cuerpo. Después de todo eso estuvo hasta que se cerró el regimiento Pudeto y fue llevado al Regimiento de Ojo Bueno, ahí estuvo un poco más tranquilo, no tuvo ningún apremio, de ahí se dirigieron al Regimiento Cochrane para después ser



llevado a Isla Dawson y estando allí fue sometido a trabajos forzados a reiteradas amenazas de muerte, a bajas temperaturas, comida en mal estado, legumbres con piedras entre medio y también después de eso, hasta finales de 1974 fue llevado a la cárcel pública ahí estuvo un período prolongado y de ahí fue trasladado a la cárcel de Capuchinos en la ciudad de Santiago y ahí fue donde sufrió una contusión en su cabeza que no fue tratada y que según él fue adrede. Esto le provocó también muchas jaquecas, dolores de cabeza y después se enteró que era una contusión grave.

REPREGUNTADA: Para que diga la testigo, como le consta lo señalado anteriormente.

Responde: Se le hizo una evaluación por medio del protocolo de Stambul, a don Hernán Biotty esta evaluación fue en línea y por medio de esa entrevista se logró hacer un informe de daño y corrobora todo el daño, y torturas físicas, psicológicas y sexuales.

CONTRAINTERROGADA: Para que diga la testigo, cuando se hizo esta evaluación.

Responde: fue en el mes de junio del presente año, como a mitad de mes más o menos.

Para que diga la testigo, quien le hizo la evaluación.

Responde: Yo le hice la evaluación, en mi calidad de psicóloga del programa Prais, que es un programa de reparación integral, para personas que fueron vulneradas de sus derechos en el periodo del 1973 a 1990, este programa depende del Estado.

Para que diga la testigo, quien le solicitó la realización del informe. Responde: El abogado Pablo Bussenius.

AL PUNTO DOS:

Responde: Si es efectivo, como conclusión que se logró recaudar en todo el informe, es posible concluir que un trastorno de estrés post traumático, esto se



refleja claramente en la sintomatología actual, donde el evaluado presenta síntomas ansiosos y depresivo cada vez que recuerda un hecho similar el hecho represivo, tiende a ser fluctuante en el tiempo este tipo de trastorno, donde hay periodos en que puede encontrarse muy bien, muy estable y otras veces puede estar muy desanimado y desmotivado. También presenta en algunas ocasiones conductas evitativas, que es un mecanismo de defensa que suelen utilizar las personas con este tipo de trastornos. Esto lo suelen aplicar este tipo de personas con este trastorno, con el objetivo de no implicarse emocionalmente con el resto, para que no se vean comprometidos aquellos recuerdos, del trauma, así también se ve como consecuencia las relaciones interpersonales, amorosas, familiares, también su actividad laboral y la percepción que tiene de él mismo, que por lo general es una evaluación errónea de baja auto estima, eso a nivel psicológico. Ahora a nivel físico se percibió que el evaluado tiene problemas para dormir, desde que ocurrieron los hechos, generándole un trastorno del sueño. También producto de estar 3 días arrodillado presenta dolores en sus rodillas.

REPREGUTADA: La parte demandante solicita la exhibición de informe de daño a consecuencia de prisión política, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, correspondiente a don Hernán Biott Vidal, acompañado por esta parte con el numeral 5 de la presentación de fecha 27 de julio de 2023, que rola a folio 30 de autos, para que la testigo reconozca la autoría de dicho informe y afirma que consta en el mismo.

Responde: Reconozco que este es el informe que yo hice y efectivamente es mi firma.

2.- **Cesar Segundo Guelet Vera**, cédula de identidad N°6.356.729-9:

AL PUNTO UNO:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XJPFKXHMxB

Responde: Sí, lo que pasó con la casa de la tortura de Colón, todas las torturas que se ejecutaban en esa época, como corriente, tirarlos al agua, al Estrecho, de ahí que yo sepa más no.

REPREGUNTADO: Para que diga el testigo, si tiene conocimiento si el demandante fue detenido con posterioridad al año 1973, en la afirmativa, razón de su detención.

Responde: Sí, fue detenido, por ser simpatizante del partido socialista, fue detenido el 19 de septiembre de 1973, se lo llevaron desde el Servicio Nacional de Salud, ahí trabajaba, se lo llevaron al Pudeto, después nos juntamos en el Cochrane, condenados ya, ahí nos reunimos para ir a la Isla Dawson.

Para que diga el testigo, a que se refiere con "condenados", cuando habría sido esto, y en qué consistía dicha condena.

Responde: Biott fue condenado en 24 de noviembre de 1973, a 20 años de presidio, todo esto sucedió en un consejo de guerra.

Para que aclare el testigo, en que calidad se juntaron en el regimiento Cochrane con el demandante y en qué calidad estuvieron en la Isla Dawson.

Responde: Nos juntamos en calidad de rematados, todos íbamos a cumplir condena en Isla Dawson, llegamos todos los condenados a la misma barraca, que era la barraca Remo.

Para que diga el testigo, cuanto tiempo permaneció en demandante en Isla Dawson y describa como era la vida en dicho lugar.

Responde: más o menos un año, 1974 salió de la Isla Dawson. La vida era levantarse a las 5 de la mañana, se izaba el pabellón nacional, cantábamos el himno nacional y salíamos a las 7 al campo a recoger leña, piedras y todo el trabajo que había que hacer en el campamento porque había que rellenar las partes que estaban malas y



llegábamos entre la 1 y las 2 de la tarde a pie y con la leña al hombro, a veces andábamos 6 a 5 kilómetros a pie y con la leña al hombro. Almorzábamos, solo comía el que le caía bien al guardia. A las 2 de la tarde volvíamos al campo a cortar leña para el otro día y ahí volvíamos entre las 7 y las 7 y media de la tarde, se daba una cena y a encerrarse en la barraca.

Para que diga el testigo, si todas estas labores que cumplían en Dawson, eran voluntarias y si tenían algún tipo de restricción a la hora de moverse al interior del centro y en la afirmativa, en qué consistía el mismo.

Responde: No, era todo obligado, no nos podíamos mover libremente, solo para pedir auxilio cuando alguien se enfermaba, pasábamos encerrados en la barraca.

Para que diga el testigo, si tiene conocimiento que sucedió con don Hernán Biott, con posterioridad a su salida de Isla Dawson.

Responde: Se lo llevaron a la cárcel de Punta Arenas, y de ahí al exilio.

La parte demandante solicita se le exhiba al testigo, foto acompañada con el numeral 1 de presentación de fecha 27 de julio de 2023, que rola a folio 30, si reconoce dentro de la misma a don Hernán Biott y las circunstancias de dicha foto.

Responde; Si, lo reconozco. Fue tomada en la Isla Dawson, estamos casi todos los que estábamos en la Barraca Remo.

Para que diga el testigo, porque la barraca se llamaba Remo.

Responde: Yo pienso que era por distinguirse cada una de las barracas y la de nosotros porque éramos los rematados.

AL PUNTO DOS: Responde: Sí, los perjuicios de la salud, de perder el trabajo y ser separado de la familia al ser exiliado, perder la familia.



REPREGUNTADO: Para que diga el testigo, socialmente que significaba haber sido detenido y condenado en un Consejo de Guerra, en Magallanes.

Responde: Creo que lo peor que nos pasó a nosotros, perder todo lo que se suponía que íbamos a tener. Nos miraban muy mal, muy mal visto, lo último, como decían los milicos, los patos malos de Chile.

3.- **José Augusto Del Carmen Vera Velásquez**, cédula de identidad N°5.150.943-9:

AL PUNTO UNO:

Responde: Sí, efectivamente, yo a él prácticamente lo ubiqué el 23 de septiembre de 1973, después de haber sido detenido unos días antes, por integrantes del servicio de inteligencia en el Regimiento Pudeto donde él se había entregado voluntariamente, después yo me enteré que le había propinado una golpiza y le colocaban corriente en el cuerpo, tortura general.

REPREGUNTADO: Para que diga el testigo, si el demandante durante el periodo que permaneció en el regimiento Pudeto, fue llevado a otro centro de detención y tortura y en la afirmativa, cual sería este.

Responde: Específicamente fue llevado a la Avenida Colón a la altura del 600, era un policlínico de la armada, que fue ocupado como casa de tortura.

Para que diga el testigo, hasta que fecha habría permanecido detenido En el regimiento Pudeto, el demandante y que sucedió posterior a ello.

Responde: La fecha exacta no la recuerdo, pero sí que fue trasladado a diferentes centros de detención, como ser a un regimiento de Río Seco y posteriormente llevado a Isla Dawson y después a la cárcel pública de Punta Arenas y posterior a Santiago, desde donde fue enviado al extranjero.

Para que diga el testigo, si tiene conocimiento el motivo de la detención del demandante y si tuvo algún tipo de procedimiento judicial que justificara la misma.



Responde: Ser militante político del partido Socialista, dirigente Regional de prensa y propaganda de la juventud socialista, en cuanto al procedimiento judicial lo desconozco, solo sé que él fue condenado por la justicia militar, una condena de 20 años, en un consejo de guerra.

Para que diga el testigo, con que fecha el demandante habría sido trasladado a Isla Dawson y por cuanto tiempo permaneció allí.

Responde: la fecha exacta no la sé, pero fue los primeros días del mes de enero de 1974, teniendo como lugar de detención la barraca Remo. La fecha en que salió no la recuerdo porque yo salí en el mes de junio del 1974 hacia Punta Arenas, al Regimiento Cochrane, el Sr. Biott se quedó en Dawson.

Para que describa el testigo, como eran las condiciones de vida en Isla Dawson.

Responde: Pésimas, porque nos hacían tortura, trabajos forzados, amenazas psicológicas permanentes.

La parte demandante solicita se le exhiba foto acompañada bajo el numeral 1 de presentación de fecha 27 de julio del presente, que rola a folio 30, si reconoce en la foto a don Hernán Biott y en qué circunstancias fue tomada esa foto.

Responde: Sí, efectivamente lo reconozco, la foto fue tomada en Isla Dawson en La barraca Remo, reconozco también al Che Márquez y Jano Olate. En la barraca Remo, estaban los compañeros que habían sido condenados por el consejo de guerra.

Para que diga el testigo, si tienen conocimiento que sucedió con el demandante con posterioridad a su salida de Isla Dawson.

Responde: Estuvo acá en la cárcel pública, de ahí remitido a Santiago y posteriormente exiliado del país a Estados Unidos.

AL PUNTO DOS:



Responde: Sí, no tan solo a él, sino que también a su familia en general, no poder estar con sus padres, psicológicamente injuriado, provocándolo, todo eso a la larga le trae un problema familiar terrible, no respetando el derecho de las personas y haber sido derechos humanos.

El hogar y la familia desaparece, haberlo mandado a un país que no conoce, le destrozó la vida familiar.

REPREGUNTADO: Para que diga el testigo, si tiene conocimiento si el demandante estuviera trabajando antes de su detención, dónde y en la afirmativa si pudo continuar con su trabajo, una vez liberado.

Responde: Sí, él era funcionario del Hospital Regional en Punta Arenas, y no pudo seguir trabajando una vez liberado porque lo exiliaron.

4.- **Sergio Reinaldo Reyes Soto**, cédula nacional de identidad N°6.401.599-0:

AL PUNTO UNO:

Responde: Sí, es efectivo. Yo fui detenido un 8 de octubre de 1973 y fui llevado como primer centro de detención al regimiento Pudeto, a esa fecha don Hernán Biott ya estaba detenido en ese recinto, por supuesto aparte de los castigos y los abusos el hecho de permanecer en ese lugar que no estaba preparado por supuesto, ya constituía un daño a la vida normal de cualquier ser humano, porque ahí se dormía en las graderías de madera del gimnasio del Regimiento Pudeto, solamente abrigados con una frazada que se nos proporcionaba, las comidas por su puesto eran potro castigo, porque prácticamente eran incomibles, el sufrimiento psicológico que el detenido tenía que soportar, era que los familiares no sabían donde estábamos, ni teníamos visitas y el daño peor psicológico era saber cuándo seríamos sacados de ese lugar, para ser llevados a centros de detención y tortura del servicio de inteligencia militar. Ahí



después de cada una de estas sesiones, volvíamos en muy malas condiciones físicas, a causa de tortura por electricidad, inmersión en aguas servidas, brutales golpizas, permanecer en posiciones de absoluta incomodidad por un prolongado tiempo y de escuchar los gritos desgarradores de dolor de otros y otras prisioneros, todo esto fundamentalmente en local que se denominó por el servicio de inteligencia militar como el Palacio de la Sonrisa, todas estas cosas las pasó don Hernán Biott como muchos de nosotros, esto es un comienzo del proceso que eventualmente don Hernán Biott fue sometido a consejo de guerra, junto a miembros y dirigentes del partido socialista de Magallanes, yo también fui sometido a consejo de guerra y en ese concepto de haber sido condenados, volvimos después a vernos, como condenados ya en el regimiento de infantería Cochrane, en Río de los Ciervos, ahí siguieron los castigos, ya estábamos condenados, teníamos que salir hacer nuestras necesidades cuando se formará un grupo de al menos 4 prisioneros, teníamos que esperar y éramos llevados a un cerro donde había una fosa de excrementos, sobre la cual había un tablón donde nos sentábamos mientras dos guardias nos apuntaban con sus metralletas a nuestras espaldas, luego habían aporreos diarios, según el concepto militar, que significa llevar a la persona al límite máximo de sus fuerzas, volvíamos después de una sesión de aporreo de más de 2 horas, heridos por hacernos arrastrar por el suelo de punta y codo, golpeados, porque caíamos extenuados, y ese era otro castigo cotidiano.

Además, que estábamos dentro de un galpón de maquinaria pesada, o tanques sin calefacción, en un círculo con alambradas de púas. A pesar de haber sido condenados por un consejo de guerra, igual no teníamos visitas. Todo esto lo pasamos junto con Hernán Biott. De ahí nos despacharon a todos los condenados a la Isla



Dawson, inauguramos una barraca de prisioneros en el campo de prisioneros de Río Chico en Isla Dawson, que se llamaba Barraca Remo, en alusión a rematados.

El campo era un centro de 5 barracas activas, con doble alambrada de púas, altísimo, en una planicie, rodeada de cerros, en la cima de esos cerros, habían puestos de vigilancia armados con batería antiaérea. De nuevo acá los castigos consistían de los aporreos tradicionales para nosotros, pero además consistían en trabajos forzados, en las condiciones naturales inhóspitas de la Isla Dawson, lo prisioneros éramos sacados a la tala de corta de árboles, en condiciones de exigencia física extrema, salíamos a la carrera o marcha forzada por las riberas del río y luego cortábamos árboles, los que debíamos transportar de vuelta al hombro, también trotando.

Muchos de nosotros que éramos estudiantes o trabajadores de oficinas, volvíamos simplemente con las manos sangrando y destrozadas por este tipo de trabajos. La única forma de comunicación con nuestros familiares era por notas escritas, que eran siempre censuradas de ida y de vuelta por los militares. Eventualmente cuando se cierra el campo de prisioneros, entiendo que Hernán Biott, estuvo hasta el cierre del campamento, a mí me sacaron antes, pero nos reencontramos nuevamente cuando todos los condenados, fuimos finalmente traídos a la cárcel pública de Punta Arenas, que estaba cerca de la plaza. Ahí los presos políticos fuimos asignados a un sector de la cárcel, habilitado como barracón donde pasábamos los días por un lapso de año y medio y dos años, finalmente estábamos en un lugar que era cárcel verdadera no como cárceles clandestinas, como fueron los otros centros de prisioneros como Pudeto, Cochrane e Isla Dawson. Ahí, Hernán Biott y nosotros tuvimos que enfrentar un nuevo desafío permanecer encarcelados hasta que se cumplan nuestras sentencias o salir como



exiliados al extranjero. Hernán Biott, yo y otros compañeros, mayormente solteros, fuimos aceptados por los Estados Unidos, y así fue que en el año 1976, tres años más tardes de nuestras prisiones, éramos llevados al anexo cárcel Capuchinos de Santiago, desde donde salíamos amarrados de pies y manos hasta un avión, que nos transportaba hacia los Estados Unidos, desde el puerto de entrada los exiliados éramos separados hacia diferentes Estados, Hernán Biott fue destinado al Estado de Illinois, y yo al Estado de Massachusetts. Ahí perdimos conexión, porque tuvimos que soportar otro tipo de sufrimiento, el desarraigo de familiares, amigos, conocidos, la problemática de funcionar en una sociedad desconocida, las dificultades de estar en un lugar con un idioma también desconocido y a pesar de todo la solidaridad, el racismo general al que éramos objeto, porque, al fin y al cabo, para los Estadounidenses no éramos más que otros Mejicanos. El golpe de gracia para Hernán Biott, para mí y para todos los que salimos al exilio, fue el recibir la noticia que, a dos años de haber estado exiliados, la dictadura publicó una lista de seis mil personas exiliadas que no podrían retornar a Chile. Hernán Biott era uno de ellos, yo también y la mayoría de los exiliados de Punta Arenas.

REPREGUNTADO: Para que diga el testigo, si conoce la fecha del consejo guerra a la que fue sometido el demandante y la condena que obtuvo.

Responde: El primer juicio de guerra fue en el mes de noviembre de 1973, y Hernán Biott fue condenado a 20 años.

La parte demandante solicita se le exhiba foto acompañada bajo el numeral 1 de presentación de fecha 27 de julio del presente, que rola a folio 30, si reconoce en la foto a don Hernán Biott y en qué circunstancias fue tomada esa foto, si él se encuentra también en esa foto.



Responde: Sí, esta foto fue tomada en Isla Dawson, en la Barraca Remo, por el estado de relajación que se nos ve, puede haber sido tomada por una visita de la cruz roja a la Isla. Hernán es el tercero de izquierda a derecha en la fila de atrás, y yo estoy casi convencido que soy uno que está de gorro atrás, después del décimo en la última fila.

AL PUNTO DOS:

Responde: Todo lo que testifique indica que hubo daño, perjuicio y sufrimiento que probablemente se extiende hasta nuestros días. Hernán Biott no ha regresado a su ciudad, yo regresé a morir aquí, pero es probable que él también fallezca en el exterior, donde no es su país.

REPREGUNTADO: Para que diga el testigo, si tiene conocimiento si el demandante se encontraba trabajando al momento de su detención, en la afirmativa, donde y si con posterioridad a su detención pudo retomar su trabajo.

Responde: Si, efectivamente Hernán Biott estaba trabajando en el Hospital Regional, antiguo, con posterioridad no pudo retomar su trabajo, porque estuvo encarcelado por alrededor de 3 años y después exiliado no, nunca retorno a su puesto de trabajo en el Hospital.

III.- **Oficio** consistente en la petición de folio 10 dirigido al Sr. Ministro en Visita Extraordinario de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, don Marcos Kusanovic Antinopai a fin de remitir copia autorizada del expediente rol N°3-2015, recepcionado con fecha 28 de diciembre de 2022, folio 17.

TERCERO: Que, para acreditar su pretensión la demandada produjo las siguientes probanzas:

I.- Instrumental, consistente en los documentos no objetados.



1.- Minuta que da cuenta del estudio efectuado respecto de las causas mencionadas, conforme a los registros del Consejo de Defensa del Estado.

2.- Planilla que recoge el resumen de cada una de las causas comprendidas en el análisis efectuada, con indicación de los roles de las causas, tanto respecto del Tribunal de Primera Instancia como de la Corte de Apelaciones respectiva.

II.- **Oficio** consistente en la petición de oficiar al Instituto de Previsión Social para que informe al tribunal de todos los eventuales beneficios otorgados al demandante, por las leyes especiales de reparación 19.992, 19.980 u otros cuerpos legales, el que fue recepcionado a folio 20.

CUARTO: Que el Fisco de Chile junto con controvertir todas las afirmaciones efectuadas por el actor, en cuanto a su calidad de prisionero político que fue objeto de torturas, afirma que carece de legitimación activa para intentar la presente acción indemnizatoria por el simple hecho de no figurar en la lista de presos políticos del denominado Informe Valech.

Al respecto cabe señalar que figurar en la referida nómina no constituye un requisito sine qua non para ser considerado preso político y objeto de torturas, ni menos un requisito previo que legitime para deducir la correspondiente acción indemnizatoria. En efecto, lo que otorga el carácter de víctima de delitos de lesa humanidad y legitima para demandar el resarcimiento de los daños sufridos es la naturaleza de los ilícitos del cual fue objeto el actor.

Así el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional señala en su artículo 7° que para efectos del Estatuto se entiende por crimen de lesa humanidad las conductas que describe, cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Entre las



conductas descritas en la norma se destaca: la tortura, persecución de un grupo o colectividad fundada en motivos políticos y desaparición forzada de personas.

A su turno, a nivel nacional en el párrafo primero de la ley 20357 se señala que constituyen delitos de lesa humanidad, aquellas conductas que respondiendo a una política de Estado o de sus agentes, bajo la dirección de un mando responsable, constituyan un ataque generalizado o sistemático a un número considerable de personas. Comprendiendo actos como la tortura, privación de libertad por más de cinco días y expulsión por la fuerza a personas del territorio del Estado.

En definitiva habrá que estarse al mérito de la prueba rendida en autos para determinar la existencia de los ilícitos y si estos pueden calificarse, conforme a la normativa referida, como de lesa humanidad.

QUINTO: Que a fin de acreditar la existencia de los delitos de lesa humanidad de que fue objeto, el actor rindió prueba instrumental y testimonial.

En cuanto a la prueba instrumental destaca el Informe de Visita al Campo de Detenidos del Regimiento de Infantería Pudeto, efectuada por Delegado General y Delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, donde se consigna como fecha de la visita el 11 de diciembre de 1973, figurando en la lista de detenidos adjunta al informe el actor don HERNÁN ENRIQUE BIOTT VIDAL.

Asimismo, se aparejó al proceso documento no objetado consistente en foto de prisioneros "Barraca Remo", Isla Dawson, invierno de 1974, donde aparece el demandante parado en tercera fila e indicado por flecha. Tal documento se ve complementado por la publicación "Los Últimos Prisioneros Políticos de Isla Dawson, Foto de septiembre de 1974", referido a los prisioneros de la "Barraca Remo", en donde se señala como prisionero de tal Barraca a don Hernán Biott.



Además se acompañó a los autos sentencia de Consejo de Guerra de fecha 26 de noviembre de 1973, por la cual se condenó al actor a 20 años de reclusión mayor en su grado máximo, como autor del delito de Rebelión Militar y otros delitos contemplados en la Ley sobre Seguridad del Estado. Complementa tal instrumental el certificado de antecedentes del demandante en el cual figura la condena referida.

Igualmente no se puede pasar por alto el "Informe de Daños a Consecuencia de Prisión Política, Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes", evacuado por un profesional del "PRAIS", lo que evidencia que el demandante ha sido atendido y evaluado por el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos, el que precisamente nace el año 1991 como respuesta al compromiso de reparación asumido por el Estado con las víctimas de la represión política durante el periodo del gobierno de la dictadura cívico-militar en Chile.

SEXTO: Que a su turno los testigos Guelet Vera, Vera Velásquez y Reyes Soto, son contestes en señalar que el demandante fue detenido por razones políticas en septiembre del año 1973, fue recluido en el Regimiento Pudeto, fue llevado al antiguo Hospital Naval, conocido como palacio de la sonrisa o de la risa, fue sometido a consejo de guerra y condenado a 20 años, fue trasladado al Regimiento Cochrane y luego a Isla Dawson donde le correspondió la "Barraca Remo". Posteriormente fue trasladado a la Cárcel Pública de Punta Arenas, de ahí al Anexo Cárcel Capuchinos de Santiago, desde donde salió al exilio.

Tales testigos son presenciales y dan razón de sus dichos, pues también fueron presos políticos en la época en que lo fue el demandante y coincidieron en los lugares ya referidos.



Además tales testigos manifiestan que en los señalados lugares de detención fueron objeto de torturas, así refieren golpizas o “aporreos”, hacinamiento, aplicación de electricidad, sumersión en estanque de agua, condiciones de vida infrahumanas y trabajos forzados entre otros.

Finalmente destaca la declaración de la psicóloga del programa PRAIS, Romina Valentina Yáñez Vásquez, quien evaluó al actor y constató en él daño derivado de su prisión política y de la tortura física y psicológica de que fue objeto.

SÉPTIMO: Que la prueba referida en los dos motivos que preceden hace plena fe en cuanto al hecho que el demandante fue preso político durante la dictadura cívico-militar y que además fue objeto de torturas, lo que no sólo se establece en base a la declaración de la testigo Yáñez Vásquez, sino que además se infiere del hecho de su estadía en lugares que el Informe Valech reconoce como recintos donde se aplicaron torturas a los presos políticos, no existiendo en autos prueba o antecedente alguno que permita concluir que se hizo una excepción en el trato respecto del prisionero político Biott Vial.

Así entonces se acredita la legitimación del actor para accionar como víctima de delitos de lesa humanidad, debiendo desecharse la alegación de la demandada en cuanto niega tal legitimidad.

OCTAVO: Que en subsidio de su alegación de falta de legitimidad, la demandada alega la improcedencia de la indemnización pretendida por limitación de la justicia transicional.

Al efecto afirma que nuestro país ha llevado adelante una política de reparación que se inserta dentro de las medidas propias de la justicia transicional. Una de estas medidas es la convocatoria a la Comisión Valech I -tanto en su período original como



en su etapa de reconsideración- y la Comisión Valech II, las que tuvieron como objeto el determinar de acuerdo a los antecedentes que se presentaren, quiénes fueron las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Para el cumplimiento de su objetivo, se constituyó un organismo técnico donde mediante un detallado procedimiento y resguardando la confidencialidad de los antecedentes que aportaron cada uno de quienes comparecieron, se entregó como resultado sendos informes en que se comunican tanto los fundamentos generales que se tuvieron en cuenta para rechazar la calidad de víctima de ciertos comparecientes, como los listados de todos quienes fueron calificados como víctimas de prisión política y torturas por el Estado.

Así, tras más de una década de haber culminado el plazo para hacerse parte de esta política de reparación, el demandante intenta invocar las disposiciones del derecho común para obtener una indemnización que debió haber reclamado en su oportunidad, en el contexto de medidas adoptadas al amparo de la justicia transicional. La omisión del demandante, libre y consciente, tiene efectos jurídicos y no puede desconocer que el Estado ha optado por un camino especial de reparación que debe ser resguardado.

NOVENO: Que tal alegación será desestimada, tanto por los argumentos vertidos en los motivos que preceden a propósito de la alegación de falta de legitimación activa del demandante, como por la consideración de la doctrina plasmada en la jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema, causas rol N°4024-13, 20.288-14 y 1092-15, conforme a la cual la acción civil que se funda en un delito de lesa humanidad tiene por



finalidad obtener la reparación integral de los perjuicios atento los tratados internacionales ratificados por Chile y la interpretación de la normativa interna conforme a la Constitución Política de la República.

Así las cosas, la alegación planteada por el Fisco contradice la normativa internacional y la constitución pues el derecho interno sólo resulta aplicable si no está en contradicción con dicha normativa.

En efecto, nuestro máximo tribunal sostiene que lo previsto en los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de la cual los Estados partes se comprometen a respetar los derechos humanos de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción y en caso de ser violados debe propenderse al pago de una justa indemnización a la parte lesionada, implica que la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad queda sujeta al derecho internacional.

Por otra parte, dicha normativa internacional obliga al Estado de Chile a reconocer y proteger el derecho a la íntegra reparación, lo que viene a limitar y condicionar la actuación de los poderes públicos conforme lo previenen los artículos 5° y 6° de la Constitución Política de la República.

En definitiva la doctrina señalada permite afirmar que no resulta factible sostener que el hecho de no haberse sometido a los mecanismos contemplados por la ley 19.992, a fin de ser reconocido y figurar en las listas de prisioneros políticos y víctima de tortura prevista por la ley, implica la pérdida del derecho a exigir la reparación del daño moral sufrido como víctima de violaciones a los DD.HH., ya que dicha legislación sólo contempló como reparación pensiones asistenciales que configuran modalidades distintas de compensación que asume voluntariamente el Estado, no pudiendo sostenerse que han renunciado a obtener la completa reparación del



daño sufrido mediante los arbitrios previstos en la legislación interna.

Asimismo, de aceptarse la tesis del Fisco quedaría sin aplicación el sistema de responsabilidad del Estado que emerge de los artículos 6° de la Constitución y 3° de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

DÉCIMO: Que además como alegación subsidiaria el Fisco postula la prescripción extintiva de la acción de perjuicios intentada por los actores. Al respecto argumenta señalando que en la especie el referido instituto jurídico se rige por lo prescrito en el artículo 2332 del Código Civil, aplicable a su respecto en virtud de lo previsto en el artículo 2497 del mismo Código.

Así conforme a la demanda, la detención y apremios sufridos por actor se produjeron entre el 19 de septiembre de 1973 hasta mayo de 1976.

Agrega que aun entendiéndose suspendida la prescripción durante el periodo de la dictadura cívico-militar, en atención a la fecha de notificación de la demanda, 22 de noviembre de 2022, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción previsto en la ley.

Asimismo, insiste en que los delitos de que fue objeto el actor no califican como de lesa humanidad, al no figurar este en los registros de la Comisión Valech.

En subsidio opone la excepción de prescripción fundada en el artículo 2515 del Código Civil, afirmando igualmente que el plazo de cinco años contemplado en la norma ha transcurrido con creces.

Alega que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere de texto expreso. No existe un texto constitucional o legal que disponga que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible.



La acción destinada a exigir la indemnización tiene un contenido patrimonial y está expuesta a extinguirse por prescripción.

Finalmente el Fisco sostiene que los instrumentos internacionales en el que se funda la demanda, no contemplan disposición alguna que declare la imprescriptibilidad de la acción civil derivada de delitos o crímenes de lesa humanidad o prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia. Al respecto se refiere a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad; Convención de Ginebra de 1949; Resolución N° 3.074, de 03 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominado "Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad"; y a la Convención Americana de Derechos Humanos.

DÉCIMO PRIMERO: Que tal alegación será igualmente desechada teniendo para ello presente el hecho que el delito de tortura,-aplicación de electricidad, sumersión en agua, trabajos forzados, entre otros-, son delitos de lesa humanidad conforme lo reconoce tanto la legislación internacional como interna, resultando irrelevante para su calificación como tal el verificar si la víctima figura o no en una determinada nomina confeccionada al efecto.

Asimismo, para el rechazo de la alegación se tiene presente la doctrina plasmada en la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal que al respecto señala que tratándose de un delito de lesa humanidad,-como ocurre en la especie-, cuya acción penal es imprescriptible conforme a la normativa internacional, resulta incoherente sostener que la acción civil indemnizatoria que emana del mismo hecho se sujete a la legislación



civil interna, pues con ello se contraría la normativa internacional sobre derechos humanos.

La acción indemnizatoria tiene por objeto obtener la reparación integra de los perjuicios ocasionados y encuentra su fundamento no sólo en principios generales del derecho internacional de los derechos humanos sino que en normativa internacional ratificada por Chile, así los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos implica que la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad queda sujeta al derecho internacional.

Dicha normativa internacional no sólo constituye un límite a la soberanía del Estado sino que además condiciona el actuar de sus órganos, conforme a lo preceptuado en los artículos 5° y 6° de la Constitución Política, no pudiendo por tanto hacer prevalecer la normativa interna, en abierta contradicción con el derecho internacional, cuando implica en los hechos la imposibilidad que el Estado cumpla con su deber de reparación integra y de hacer cesar las consecuencias de la violación a los derechos humanos, comprometiendo así su responsabilidad ante la comunidad internacional.

DÉCIMO SEGUNDO: Que finalmente y también en carácter de subsidiario la demandada efectúa alegaciones en cuanto a la existencia del daño y el monto de la indemnización solicitada.

Al respecto cabe señalar que se determinará la existencia del daño y su magnitud conforme al mérito de autos. En lo relativo al monto de la indemnización, de constatarse la existencia de daño, se determinará prudencialmente considerando la magnitud del mismo.

DÉCIMO TERCERO: Que descartadas las alegaciones de la demandada, cabe señalar que el actor afirma que producto de los delitos de lesa humanidad de que fue objeto durante su cautiverio sufrió un daño moral.



Al efecto, resulta necesario tener presente que se ha entendido que el daño moral comprende todo detrimento o menoscabo que por hecho o culpa de otro la víctima sufre en sus intereses extrapatrimoniales.

Al respecto don Álvaro Vidal Olivares al tratar el daño corporal como manifestación del daño moral, cita a la profesora Carmen Domínguez Hidalgo, quien refiriéndose al daño moral señala que: "(...) estamos con aquellos que conciben al daño moral del modo más amplio posible, incluyendo allí todo daño a la persona en sí misma "física o psíquica", como todo atentado contra sus intereses extrapatrimoniales."

Asimismo, cita sentencia de la Corte Suprema del año 2014 (Rol N° 12048-2013) que señala, "Que el daño moral se ha entendido como el pesar, dolor, molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos. Si atendemos al concepto, éste abarca no sólo las lesiones a bienes de la personalidad, lo que en estricto rigor constituye daño moral, sino que además quedan comprendidos las lesiones corporales, la aflicción psicológica y la pérdida de oportunidades para disfrutar la vida. De esta manera y considerando la lesión de un interés jurídicamente relevante, se puede llegar a la compensación del daño no patrimonial no sólo por el dolor o sufrimiento que se padece." ("Responsabilidad Civil Médica", DER Ediciones Limitada, primera edición, octubre de 2018, p. 83).

Esta concepción amplia del daño moral supera el denominado pretium doloris, sufrimiento efectivo de la víctima, y comprende aspectos como la pérdida de ventajas de vida, entre las que encontramos sin duda las relaciones de familia, laborales y socio-comunitarias.

DÉCIMO CUARTO: Que a fin de acreditar la existencia y magnitud del daño moral invocado, así como su nexo



causal con los delitos de lesa humanidad de que fue objeto, el demandante rindió prueba instrumental y testimonial.

En cuanto a la instrumental, aparejó a los autos "Informe de Daños a Consecuencia de Prisión Política, Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes", suscrito por la psicóloga Romina Yáñez Vásquez.

Tal informe señala que se pudo detectar que el demandante padeció durante su prisión, que se extendió desde el 19 de septiembre de 1973 hasta el año 1976 en que sale al exilio, tortura física y psicológica. Así entre otros se constató que sufrió golpes de mano, pies y con armamento, aplicación de electricidad, privación del sueño y trabajos forzados. En el ámbito psicológico fue objeto de amenazas de muerte, amenazas de tortura, simulación de fusilamiento y de suicidio.

En este punto cabe destacar que en el marco de las entrevistas a que dio lugar el informe psicológico, el actor refiere sesiones de tortura con electricidad que incluso lo llevaron a episodios de paro cardíaco, debiendo ser asistido por el facultativo con que contaban los torturadores, Dr. Guillermo Araneda, quien le efectuó masajes en el pecho a fin de superar tal situación y determinó un descanso para la víctima, para luego seguir con la tortura.

Asimismo, hace referencia a una ocasión en que se le pasa una pistola para que se suicide con un tiro en la cabeza, al no hacerlo un militar le toma la mano y le hace apretar el gatillo sin embargo el arma no estaba cargada, para luego reírse de él y patearlo reiteradamente.

Igualmente relata su llegada a Isla Dawson luego de ser condenado a 20 años de prisión por "rebelión



militar” por un consejo de guerra, donde indica que es despojado de su nombre pasando a llamarse “Remo3”, en referencia al nombre de la barraca donde fue destinado, “Barraca Remo”. Además el demandante hace referencia a los trabajos forzados a que fue sometido en dicho campo de concentración.

En cuanto al impacto que la tortura física y psicológica causó en el actor, el informe señala que desde el área psicológica se aprecia un impacto en su comportamiento que afectó sus relaciones sociales, su capacidad de mantener vínculos fuertes y seguros, pues su forma de desenvolverse en este ambiente es insegura y desconfiada.

Emocionalmente, le tomó años recomponer su autoestima y seguridad en sí mismo. Hasta el día de hoy se observan indicadores de estrés postraumático en el actor.

En el ámbito familiar el informe afirma que el impacto psíquico experimentado por el actor determinó de manera inexorable la historia de desarrollo del sistema familiar, con posterioridad a su vivencia como preso político. Así el actor reporta que desde que fue detenido nunca más volvió a ver a su abuela Leonor Biott, con la que se había criado, pues ella falleció en 1994. Tiene recuerdos muy dolorosos y que lamenta hasta día de hoy pues señala: *“ella pensó que yo había hecho algo malo, por haberme ido a entregar, ella sufrió mucho con todo eso y eso también afectó su salud”*.

En cuanto a la relación del actor con sus padres fue un poco descuidada, fue una relación evitativa, donde escasamente mantenía con ellos contacto telefónico o cartas, paso mucho tiempo fuera por lo que la relación ya no era cercana.



Finalmente en el ámbito político-social se señala que frente a acciones masivas como protestas y marchas, el actor es resistente a participar debido a sentimientos de desesperanza que le ha ocasionado las injusticias relacionadas a la política. Además la represión sufrida ha generado en él un cambio en la imagen respecto de las Fuerzas Armadas y Carabineros, provocándole remordimiento, sentimientos de rechazo y malestar.

DÉCIMO QUINTO: Que en cuanto a la prueba de testigos destaca la declaración de la psicóloga Romina Valentina Yáñez Vásquez, quien evacuó el informe de daños del actor en el marco del PRAIS, referido en el motivo que precede.

La testigo junto con reconocer el informe que le fue exhibido y ratificar su contenido, agrega en relación con el daño sufrido por el demandante que se le constató un estrés post traumático, que se refleja claramente en su sintomatología actual pues presenta síntomas ansiosos y depresivos cada vez que tiene recuerdos similares al hecho represivo. Agrega que este tipo de trastorno tiende a ser fluctuante en el tiempo donde existen periodos en que puede encontrarse muy bien, estable, y en otros puede encontrarse muy desanimado y desmotivado.

Además presente conductas evitativas que es un mecanismo de defensa de las personas que sufren el referido trastorno, con el fin de no implicarse emocionalmente con el resto para que no se vean comprometidos aquellos recuerdos del trauma.

A su turno los testigos Guelet Vera, Vera Velásquez y Reyes Soto son contestes en señalar que a consecuencia de la prisión, tortura y exilio, sin duda se ha causado daño al actor y a su familia.



DÉCIMO SEXTO: Que la prueba instrumental y testimonial referida hace plena fe en cuanto a que los tratos crueles e inhumanos que se dan por acreditados,-privación ilegal de libertad, aplicación de electricidad, golpizas, inducción al suicidio, entre otros-, cuyos efectos son posibles de evidenciar en el demandante conforme se asevera en el informe del PRAIS aparejado a los autos y la testimonial producida, configura la tortura de que fue objeto el actor, impetrada con el sólo propósito de obtener una supuesta información o una confesión,-donde están las armas, cómo me comunicaba con los guerrilleros cubanos que se encontraban en la zona o el paradero del resto de la dirección de la Juventud Socialista-, y de castigarlo por el sólo hecho de militar en el Partido Socialista de Chile que participó en el gobierno de la Unidad Popular derrocado mediante el golpe de Estado, causando en él un daño positivo o efectivo en sus esfera mental, menoscabándolo en su dignidad como ser humano, a tal punto que se le despojó incluso de su nombre cosificándolo con la denominación "Remo3".

Dicha aflicción psíquica, que dio origen a un estrés post traumático conforme al informe PRAIS y a la declaración de la profesional que lo evacuó, se extienden hasta la actualidad.

Asimismo, los actos de lesa humanidad de que fue objeto el demandante le produjeron un perjuicio de agrado o pérdida de ventajas de vida, en el ámbito social, familiar y socio-político, como ya se señaló en los motivos que preceden.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que encontrándose acreditado el actuar ilícito del Estado, contrario a la constitución y a las leyes, y el daño que dicho actuar causó al demandante, surge entonces su responsabilidad al tenor de lo previsto en los artículos 6°, 7° y 38 inciso 2° de



la Constitución Política de la República y artículos 4° y 42 de la Ley Orgánica Constitucional Sobre Bases Generales de la Administración del Estado, y artículos 2314 y siguientes del Código Civil, por lo cual se acogerá la demanda.

DÉCIMO OCTAVO: Que en la avaluación de la indemnización de los perjuicios, que se fijará en lo resolutivo de esta sentencia, se considerará la circunstancia que la víctima fue apresada en forma arbitraria, torturado y confinado en circunstancias degradantes para la dignidad humana, desde el 19 de septiembre de 1973 hasta mayo del año 1976, como además el hecho que en dicho año es enviado al exilio con prohibición de ingreso al país hasta fines de la dictadura cívico-militar, todo ello en el marco de una política represiva del Estado que comprendió la violación sistemática de los DD. HH. de aquellos compatriotas considerados peligrosos para los intereses de la dictadura cívico-militar que detentaba el poder en Chile.

Asimismo se tendrá presente que la detención y tortura de que fue objeto el actor repercutió tanto en su salud psíquica, presentando un estrés postraumático cuya sintomatología está presente hasta hoy, como en el desarrollo de su ciclo vital en el ámbito familiar, social y político-social.

DÉCIMO NOVENO: Que en cuanto a la época que se considerará para el cálculo de reajustes e intereses, considerando exclusivamente que el demandante pidió que se devengaran desde que la sentencia cause ejecutoria, lo que sin duda debe entenderse como ejecutoriada atendido que un eventual recurso de apelación que impugne el mérito de esta sentencia necesariamente debe concederse en ambos efectos, suspensivo y devolutivo, se accederá a tal petición ordenando que la cantidad de



dinero que se ordene pagar se reajustará y devengará intereses desde la fecha en que el presente fallo quede ejecutoriado.

VIGÉSIMO: Que en lo relativo a las costas diremos que el hecho que el Consejo de Defensa del Estado tenga la obligación de defender judicialmente los intereses del Fisco, conforme lo ordena el artículo 2° de su ley orgánica, no significa que por esa sola circunstancia haya tenido motivos plausibles para litigar, pues la plausibilidad para oponerse a una pretensión judicializada hay que buscarla en los argumentos vertidos en el respectivo proceso y no en antecedentes que resultan totalmente ajenos al juicio.

Sostener lo contrario implica en los hechos la derogación del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil respecto del Fisco, creando de facto un privilegio procesal en su beneficio que pugna con nuestra legislación, tanto a nivel constitucional como legal, manifestadas en diversas normas que buscan evitar que se discrimine a particulares frente al Fisco. Tal principio queda de manifiesto en el artículo 19 N°2 y 21 de la Constitución Política de la Republica y a nivel legal se puede citar por vía ejemplar el artículo 2497 del Código Civil.

Finalmente cabe señalar que la propia ley orgánica constitucional del Consejo de Defensa del Estado, manteniendo la debida armonía que debe tener el ordenamiento jurídico, no exime al Fisco del pago de costas, así se desprende de su artículo 64 que en lo pertinente señala que no será aplicable a los funcionarios del Consejo de Defensa del Estado lo dispuesto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, es decir, los procuradores judiciales no responderán con su patrimonio personal de las costas



procesales que son de cargo del Fisco de Chile. A contrario sensu resulta claro entonces que puede condenarse a la persona jurídica de derecho público Estado-Fisco de Chile al pago de costas, no obstante la obligación legal del Consejo de defender judicialmente sus intereses.

Así las cosas, considerando que la demandada ha resultado totalmente vencida y estimando del mérito del proceso que no ha tenido motivos plausibles para litigar,-la negación de la legitimación activa del demandante por el sólo hecho de no figurar en una lista de presos políticos no encuentra mayor sustento jurídico y la prescripción de la acción civil son argumentos que reiteradamente han sido rechazados por los tribunales de justicia-, será condenada al pago de las costas generadas por el presente juicio.

Y considerando además lo prescrito en los artículos 5°, 19 N° 1 de la Constitución Política de la República; artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 14.1 de la Convención sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes; artículo 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículos 144, 159, 160, 161, 162, 170, 253 y siguientes y 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **SE RESUELVE:**

I.- Que **SE RECHAZA** la excepción de prescripción extintiva intentada por el Fisco de Chile.

II.- Que **SE ACOGE** la demanda de indemnización de perjuicios deducida por el abogado Pablo Andrés Bussenius Cornejo, en representación de don **HERNÁN ENRIQUE BIOTT VIDAL**, en contra del **ESTADO DE CHILE**, representado por el abogado procurador fiscal de Magallanes don Claudio Patricio Benavides Castillo.



En consecuencia, se **CONDENA** al **ESTADO DE CHILE** a pagar a la parte demandante, por concepto de indemnización de daño moral, la suma de **\$150.000.000.-**.

III.- Que la suma de dinero que se ordena pagar será reajustada conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor y devengará intereses corrientes, desde la fecha en que la presente sentencia quede ejecutoriada.

III.- Que se **CONDENA** a la demandada a pagar las costas de la causa por haber sido totalmente vencida.

Regístrese, notifíquese, consúltese si no se apelare y archívese en su oportunidad.

ROL C-1881-2022.-

**DECTADA POR DON CLAUDIO IVÁN NECULMÁN MUÑOZ, JUEZ
TITULAR DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE PUNTA ARENAS.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Punta Arenas, cuatro de diciembre de dos mil veintitrés.**

